

Bogotá D.C., marzo del 2025

Señores

JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Ventanilla SAMAI

E.S.D

REFERENCIA: CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y EXCEPCIONES

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

RADICADO: 76001-33-33-009-2024-00278-00

DEMANDANTE: ALEXANDER ARANA FLOR

DEMANDADO: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS USPEC Y OTROS

DIEGO FABRIANNY ÑAÑEZ VIVEROS, mayor y vecino de Bogotá, abogado identificado con cédula de ciudadanía No 1.061.087.109 expedida en Florencia, Cauca, con Tarjeta Profesional No. 276.474 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi condición de Apoderado Especial de **LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC-**, según el memorial poder que me fue otorgado por el doctor **SERGIO ANDRÉS AGÓN MARTÍNEZ**, en representación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, en el cargo de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica mediante resolución número No. 000194 del 09 de abril de 2024, delegatario de la función de representación judicial de la entidad conforme al numeral 5 del artículo 14 del Decreto 4150 del 2011, procedo dentro del término legal a **CONTESTAR LA ACCIÓN DE REPARACION DIRECTA** presentada en el proceso de la referencia, en los siguientes términos:

1. SOLICITUD DE SENTENCIA ANTICIPADA POR CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL

Antes de iniciar, de manera respetuosa se solicita a su señoría dictar sentencia anticipada en el presente proceso, teniendo en cuenta que operó el fenómeno de la caducidad del presente medio de control propuesto y promovido por la parte actora, tal como se sustenta a continuación:

El último inciso del párrafo 2º del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, enseña que la excepción de caducidad del medio de control propuesta en la contestación de la Demanda, se declarará fundada mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A, de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 175. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Durante el término de traslado, el demandado tendrá la facultad de contestar la demanda mediante escrito, que contendrá:

(...)

PARÁGRAFO 2o. (Modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021): De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicarán. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A." (Subrayado es propio).

A su turno, el numeral 3 del artículo 182 A de la misma norma, sobre el particular establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021:> Se podrá dictar sentencia anticipada:

(...)

3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.

(...)

PARÁGRAFO. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se

pronunciará.

Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso.” (Subrayado es propio).

Ahora bien, desde el punto de vista sustancial, establece el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, que la demanda deberá ser presentada:

“(...) 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. (...)” (Subrayado es propio)

De acuerdo a las normas anteriores, se plantea al Despacho, de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado y antecedentes judiciales en situaciones similares, que son criterios auxiliares de interpretación judicial, el siguiente problema jurídico en este punto:

PROBLEMA JURÍDICO:

Determinar si los demandantes presentaron la demanda dentro de la oportunidad debida, o si, por el contrario, operó la caducidad del medio de control de Reparación Directa, de conformidad con el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

Desde nuestro punto de vista, de manera respetuosa solicitamos al Despacho que la tesis que debe acogerse es que la presente Demanda en el medio de control de Reparación Directa fue presentada cuando ya había operado la caducidad del medio de reparación directa, en tanto, se formuló por fuera de la oportunidad establecida en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, cuando se había agotado el término de dos años, contados a partir del **conocimiento** del daño antijurídico, para proponerla oportunamente, situación que impide al Despacho abordar de fondo el asunto, en tanto no concurre el presupuesto procesal de demanda oportuna.

En un caso similar al presente asunto, en donde demandan por hacinamiento en un centro penitenciario y carcelario, el H. Consejo de Estado señaló que la caducidad se cuenta desde que el interno tuvo **conocimiento** de la situación de hacinamiento:

"El fenómeno de caducidad para demandar se configura cuando vence el término previsto en la ley para acudir ante los jueces para demandar. Término que está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho opte por accionar ante las autoridades competentes. La caducidad tiene lugar cuando expira ese término perentorio fijado por la ley. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, según el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

El término de caducidad establecido en el artículo 136 CCA es una norma de orden público -y por consiguiente de obligatorio cumplimiento (art. 6 CPC hoy retomado por el arto 13 CGP)- de la que no pueden disponer los jueces ni las partes, porque constituye una garantía para la seguridad jurídica y el interés general.

Así lo resaltó la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad de ese precepto, pues la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho. Por ende, según la Corte, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas en la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado, situación que no se extiende a quien no acudió en tiempo a la defensa de sus derechos¹.

Este criterio lo reiteró la Corte en el estudio de constitucionalidad del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136.9 CCA, al destacar que la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que apunta a la protección del interés general, de modo que su configuración impide el ejercicio de la acción y no puede iniciarse válidamente el proceso.

También señaló que la caducidad, dado su carácter de orden público, es indisponible y puede ser declarada de oficio por el juez, cuando se verifique su ocurrencia².

¹ Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-574 de 1998 [fundamento jurídico 3.5].

² Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001 [fundamento jurídico 4].

*El artículo 136 CCA dispuso que el punto de partida para el cómputo del término de caducidad es el hecho dañoso (acción u omisión causante del daño) y fijó el plazo para la interposición de la demanda en dos años, sin hacer distinciones sobre el tipo de daño que se cause. Por ello, basta verificar el día en que ocurrió el hecho, omisión u operación administrativa para contabilizar el plazo señalado, a menos que el perjudicado no hubiera podido conocer el daño en esa fecha, pues en este evento, **la caducidad se debe contar desde que tuvo conocimiento de este**³.*

Así, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño⁴.

(...)

*Como el 9 de marzo de 2000, William Alberto Molina Sánchez solicitó a la entidad demandada terminar su condena en el centro carcelario del Distrito Judicial de Medellín Bellavista, **desde esa fecha el demandante tenía conocimiento de las condiciones del centro carcelario**. Por ello, el término de dos años para formular la demanda comenzó a correr a partir del 10 de marzo de 2000 (f. 150, c. 1) y venció el 10 de marzo de 2002. Como la demanda se presentó el 4 de diciembre de 2002, según da cuenta el sello de radicado (f. 23 c. 1), operó el fenómeno preclusivo de la caducidad y, en consecuencia, la Sala revocará la sentencia apelada.”*

Caso Concreto:

Según narran los hechos de la Demanda, así como la pretensión primera de la misma, se busca que las entidades demandadas sean declaradas administrativamente responsables por los perjuicios ocasionados al señor ALEXANDER ARANA FLOR, derivado de las condiciones de hacinamiento sufridas desde el día 25 de enero 2022 hasta el día 04 de diciembre del 2022, mientras se encontraba detenido en las instalaciones del Caí- Comando Sur, Palmira - Valle del Cauca.

Según se describió en los hechos de la misma demanda, el señor ALEXANDER ARANA FLOR, **ingresó en las instalaciones del Caí- Comando Sur, de Palmira - Valle del Cauca. el día 25 de enero 2022.**

Sobre la confesión de parte, precisamente, en asuntos, donde se discute la

³ Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de octubre de 2011, Rad. 20.692 [fundamento jurídico 3.1].

⁴ Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de octubre de 2020, Rad. 61.767 [fundamento jurídico 4], con salvamento de voto

ocurrencia de un daño de esta magnitud, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 concluye:

"(...) Así las cosas, en virtud de las disposiciones que regulan la confesión judicial, las manifestaciones hechas por los apoderados de las partes en la demanda, en las excepciones y en las respectivas contestaciones ostentan valor probatorio, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 191 del C.G.P. " En el sub lite, el apoderado de la parte actora, en el escrito inicial, sostuvo que los afectados desde el 6 de abril de 2007 conocieron que el señor Clodomiro Coba León falleció como consecuencia de unos hechos en los que participó el Ejército Nacional, manifestación que constituye una confesión por medio de apoderado judicial, en los términos de los artículos 191 y 193 del C.G.P. El hecho confesado trae consecuencias jurídicas adversas al confesante y, a su vez, favorecen a la parte contraria, pues permiten determinar el momento a partir del cual se debe analizar el presupuesto de oportunidad en el ejercicio del derecho de acción. Frente al supuesto que se deduce de la confesión, la ley no exige un medio de prueba específico para acreditarlo, por manera que se debe dar mérito probatorio a la afirmación enunciada (...)"

En ese sentido, sí la alegada vulneración de los derechos del demandante tiene como causa la privación de la libertad en condiciones de hacinamiento, incluso desde el mismo momento del ingreso del actor, ha de considerarse entonces que, es a partir justamente de ese momento (ingreso) que ha de contabilizarse el término de caducidad de los dos años para solicitar la reparación de los perjuicios, pues en ese momento es que tuvo conocimiento de los mismos.

Cuando el hoy demandante ingresó, esto es el 25 de enero de 2022, conoció del hacinamiento de la misma, tal como lo reconoce y así lo propone en su mismo escrito de demanda, pues justamente señala que para la época en que fue privado de la libertad, ésta presentaba un hacinamiento y que este flagelo es una problemática a nivel nacional que viene de tiempo atrás; luego entonces desde esa fecha debe iniciarse el conteo de la caducidad, **por lo que tenía hasta el 26 de enero del año 2024 para interponer la demanda de reparación directa**, pero se desprende de los anexos de la Demanda que el actor radica la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación el 25 de junio de 2024, cuando ya había operado dicho fenómeno procesal, y más aún cuando radica la demanda el día 29 de noviembre del 2024.

En ese orden de ideas, no hay otra consecuencia distinta a que se declare prospera la excepción de caducidad planteada, al haber fenecido el tiempo con el que contaba la contraparte para incoar la acción que hoy nos convoca.

2. FRENTE A LOS HECHOS

HECHOS: 1, 2, 3, 4, 5 y 6: No nos consta, son hechos ajenos a las competencias de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, conforme al artículo 4 del Decretos 4150 de 2011.

HECHO 7: No es un hecho, es un requisito de procedibilidad que la norma exige para demandar por este medio de control.

3. PRETENSIONES

Al respecto, **ME OPONGO CATEGÓRICAMENTE** a la prosperidad de cada una de las pretensiones incoadas, **EN LO QUE RESPECTA A LA USPEC, como quiera que, tal y como se demostrará más adelante**, en primer lugar, los daños alegados no se encuentran plenamente acreditados, ni tampoco son determinados o determinables, por lo que, al ser el “daño” el primer elemento de la responsabilidad patrimonial o extracontractual del estado, su ausencia o falta de acreditación torna inocuo el estudio de imputación fáctica o jurídica de aquel a la administración.

Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior, los daños alegados tampoco podrían ser imputados fáctica ni jurídicamente a la USPEC, en razón del contenido obligacional asignado legal y reglamentariamente tanto por el legislador como por el Gobierno Nacional a esta Unidad a través de los Decretos 4150 de 2011, Ley 1709 de 2014 y Decreto 1069 de 2015 y el cual ha sido satisfecho por parte de la USPEC a través de las gestiones administrativas, logísticas y contractuales para la prestación de los diferentes servicios que suministra al INPEC.

En tal virtud, no existe razón ni fundamento a partir del cual sea dable sostener que la USPEC se ha sustraído del cumplimiento del marco obligacional que le impone la precitada normativa, es decir, que el servicio a su cargo no ha sido prestado, o se ha suministrado de forma ineficiente, irregular o tardía; asimismo, **la USPEC tampoco es la entidad encargada de ejercer la vigilancia y custodia de las personas privadas de la libertad, por lo que no existe una posición de garante respecto de aquella población.**

Por tal razón, es evidente que los daños alegados, de forma alguna podrían ser imputados a mi representada, desde ninguno de los dos regímenes de responsabilidad extracontractual de la administración, esto es, subjetivo u objetivo.

Entonces, no existe una relación directa entre los hechos endilgados y el objeto de creación de la Unidad, toda vez que únicamente tiene como fin gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativos **requeridos** por el INPEC, y en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, motivo o razón, la vigilancia y custodia de la población privada de la libertad recluidas en estaciones de policía o similares. Es más, en los establecimientos de reclusión del orden nacional la guardia penitenciaria depende directamente del instituto penitenciario y carcelario y así queda consagrado en el decreto 4151⁵ de noviembre 3 de 2011.

Finalmente, basta con señalar que el actor no detalla de manera acertada la acción u omisión en que haya podido incurrir la Unidad, tal y como lo consagra el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, que al tenor señala:

"Reparación directa. *En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.*

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma". (Subrayas fuera del texto).

4. LA AUSENCIA DE ACREDITACIÓN DEL "DAÑO MORAL"

En relación con esta modalidad de perjuicio, ha sostenido el H. Consejo de Estado:

"Cuando se hace referencia al daño moral, se alude al generado en "el plano psíquico interno del individuo, reflejado en los dolores o

⁵ Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y se dictan otras disposiciones.

padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión a un bien". Este daño tiene existencia autónoma y se configura una vez satisfechos los criterios generales del daño: **que sea particular, determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente tutelado**. El daño moral producto de lesiones puede configurarse tanto en la persona que sufre la lesión, a la que se conoce como víctima directa, como también en sus parientes o personas cercanas, víctimas indirectas"⁶

Asimismo, en relación con la indemnización por el daño moral derivado de lesiones, el H. Consejo de Estado ha sostenido de forma pacífica que el criterio que determina el monto de aquella indemnización no es otro que la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por la víctima, estableciéndose como monto máximo de aquella modalidad de indemnización 100 SMLMV para la víctima directa del daño y para las personas con quienes aquella tiene relación afectiva conyugal y paterno filial **SOLO CUANDO LA GRAVEDAD DE LA LESIÓN SUPERA EL 50%**⁷.

Así las cosas, sostenemos de manera categórica, que en el presente asunto el **DAÑO ALEGADO, ES INCIERTO, EVENTUAL E HIPOTÉTICO, y asimismo TAMBIEN ES INDETERMINADO E INDETERMINABLE respecto a la responsabilidad que se imputa a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios**. Asimismo, y además de tratarse de un daño que no comporta vocación de ser reparado, debido a que el presunto **daño no fue causado** por la entidad que represento, dado que esta Unidad atiende las necesidades del INPEC y, las estaciones de policía no están a cargo de dicho instituto. También se trata de una pretensión absolutamente desfasada.

En conclusión, de conformidad con las precitadas reglas jurisprudencias del H. Consejo de Estado, en el presente asunto no hay lugar a desplegar un estudio de imputación jurídica al Estado, al buscarse la reparación de un daño **TANTO INCIERTO, HIPOTÉTICO Y EVENTUAL, COMO INDETERMINADO E INDETERMINABLE**, en el entendido que la administración no causo el daño que se predica, y cuyo monto de reparación es desfasado y desproporcionado en relación con los criterios establecidos por dicho alto tribunal.

⁶ Consejo de Estado Colombiano- Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera Subsección B- Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth Bogotá D.C., Radicación Número:19001-23-31-000-1997-04001-01(19836) Sentencia del 30 de Junio de 2011

⁷ Consejo de Estado Colombiano- Sección Tercera

En tal virtud, es evidente que la pretensión encaminada al resarcimiento del presunto daño moral ocasionado a la parte demandante, no comporta vocación de prosperidad alguna.

5. AUSENCIA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO DERIVADO DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES

Al respecto, lo primero que vale la pena advertir, es que el H. Consejo de Estado estableció una tipología de daño denominada "*Daño por Afectación o Vulneración Relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados*" y al respecto, ha sostenido dicha H. Corporación:

"Procederá siempre y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia la compensación a través de medidas reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente o estable y los parientes hasta el 1° de consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. Debe entenderse comprendida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas "de crianza".

Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de reconocer la dignidad de las víctimas, reprobando las violaciones a los derechos humanos y concretar la garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional. Para el efecto el juez, de manera oficiosa o a solicitud de parte, decretará las medidas que considere necesarias o coherentes con la magnitud de los hechos probados

En casos excepcionales, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación integral podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y la naturaleza del bien o derecho afectado"⁸ (Negrita Fuera de Texto)

⁸ Consejo de Estado Colombiano- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera "Documento final aprobado mediante acta del 28 de agosto de 2014 referentes para la reparación de perjuicios inmateriales."

Al tenor de lo anterior, vale la pena destacar que:

- En primer lugar, el *telos* o finalidad de esta tipología de perjuicio no es otro que garantizar la reparación integral tanto de la víctima directa del daño como de sus familiares, por lo que las medidas que se privilegian, **no son de carácter indemnizatorio sino compensatorio.**
- En segundo lugar, solo de manera excepcional, la restauración por dicha modalidad de perjuicio es medible en dinero, y aquella excepción se halla supeditada a que las medidas de satisfacción por las que propende esta tipología de daño, no son suficientes para garantizar la reparación integral de sus destinatarios.
- Cuando aplica la precitada excepción, el monto máximo de indemnización establecido por el H. Consejo de Estado es de 100 SMLMV.

Hechas las anteriores precisiones, y descendiendo al presente asunto, sea lo primero advertir, que del líbello demandatorio no se desprenden la certeza del daño alegado bajo esta modalidad, pues la parte demandante pareciera tener la convicción de que, por el hecho de estar recluido en un establecimiento penitenciario y carcelario, per se, se configura esta modalidad de daño y pretende obviar la necesaria acreditación de aquel, conforme lo exigen las precitadas posiciones del H. Consejo de Estado en virtud de las cuales, el daño incierto, eventual e hipotético no da lugar a indemnización.

En segundo lugar, la parte demandante no establece de forma alguna, por qué la indemnización pretendida por la presunta causación de esta modalidad de perjuicio, debe ser medible en dinero y no a través de las medidas de restauración señaladas por el H. Consejo de Estado, es decir **¿Por qué el caso del señor ALEXANDER ARANA FLOR, escapa de la regla general en virtud de la cual se privilegian las medidas compensatorias mas no indemnizatorias? O, ¿En qué medida aquellas medidas compensatorias no son suficientes para la reparación integral del eventual daño alegado?**

En conclusión, la pretensión encaminada al resarcimiento por esta modalidad de perjuicio, tampoco se encuentra llamada a prosperar, como quiera que, en primer lugar, el daño no se halla plenamente acreditado, y en segundo lugar, de estarlo, el demandante no establece las razones por las cuales su circunstancia específica y concreta, conlleva a que se configure la excepción a la regla general consistente en que la reparación por esta tipología de daño, es de carácter

compensatorio mas no indemnizatorio, y solo de manera excepcional es medible en dinero, cuando las medidas restaurativas no son suficientes para la reparación integral del perjuicio.

En tal virtud, en el presente asunto, la pretensión encaminada a su resarcimiento, tampoco comporta vocación de prosperidad dentro de la presente Litis.

6. EXCEPCIONES

De conformidad con los argumentos expresados a lo largo de la presente contestación de demanda, solicito muy comedidamente al H. Señor Juez, declarar probadas las excepciones que a continuación me permito enlistar, así como cualquiera otra excepción que su H. Señoría encuentre probada con ocasión de la presente contestación de demanda:

6.1. Previas y Mixtas.

6.1.1. Falta de legitimidad en la causa por pasiva

En relación con la ausencia de legitimación en la causa por pasiva, el H. Consejo de Estado en sentencia del 3 de mayo de 2013 proferida dentro del expediente 26112 estableció que aquella:

“[s]e configura cuando la entidad demandada no participó en los hechos invocados como dañosos y, en consecuencia, no está llamada a responder por los perjuicios que éstos hubieran podido causar”⁹

Atendiendo a que en el presente asunto, se alega como daño antijurídico presuntamente irrogado a la parte demandante, derivado por hacinamiento en el Caí- Comando Sur, de Palmira - Valle del Cauca, **lo cual escapa de la órbita competencial de esta Unidad. Pues, esta entidad solo tiene responsabilidades funcionales para los establecimiento de reclusión del orden nacional a cargo del INPEC, conforme lo establece el artículo 4 del Decreto 4150 de 2011** y, de conformidad con lo expresado a lo largo de la presente contestación de la demanda, de las razones de defensa atrás señaladas y que hago parte íntegra de la presente excepción.

⁹ Consejo de Estado Colombiano, sentencia del 3 de mayo de 2013 expediente Nro. 26112

Así las cosas, es incontrovertible que la Gestión de la USPEC, contrario a ser participativa del daño alegado, se ha erigido como una solución a una problemática estructural, razón por la cual, de conformidad con la regla jurisprudencial citada ab initio de la presente excepción, es evidente que **NO EXISTE FUNDAMENTO JURÍDICO NI FÁCTICO A PARTIR DEL CUAL MI REPRESENTADA PUDIERE SER LLAMADA A RESPONDER PATRIMONIALMENTE POR LA PRODUCCION DE LOS DAÑOS ENROSTRADOS A TRAVÉS DEL PRESENTE MEDIO DE CONTROL AL NO HABER PARTICIPADO EN LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO QUE SE ALEGA.**

POR TAL RAZÓN, ES INCONTROVERTIBLE QUE A MI PROHIJADA LE ASISTE FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA DENTRO DEL PRESENTE ASUNTO.

6.1.2. Caducidad de la Acción

La caducidad es un fenómeno jurídico en virtud del cual se pierde la facultad de accionar ante la jurisdicción por no haber ejercido su derecho dentro del término que señala la ley.

El artículo 164 No. 2 literal i del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, frente a la oportunidad para presentar la demanda de reparación directa consagra:

"Art.164. La demanda deberá ser presentada:

(...)

1. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(...) i. Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición. (...)" (Negrilla fuera del texto)

Sobre el inicio de término de caducidad de la reparación directa con fundamento del hecho dañoso el Consejo de Estado¹⁰ – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Sala Plena – precisó:

*“Precisado lo anterior, a modo de conclusión, la Sección Tercera aclara que, mientras no se cuente con elementos de juicio para inferir que el Estado estuvo implicado en la acción u omisión causante del daño y que le era imputable el daño, el plazo de caducidad de la reparación directa no resulta exigible, **pero si el interesado estaba en condiciones de inferir tal situación y, pese a ello no acudió a esta jurisdicción, el juez de lo contencioso administrativo debe declarar que el derecho de acción no se ejerció en tiempo, bien sea al analizar la admisión de la demanda, al resolver las excepciones en la audiencia inicial o al dictar sentencia, según el caso**” (negrilla propia).*

En consecuencia, se tiene que el señor ALEXANDER ARANA FLOR estuvo recluso en las instalaciones del Caí - Comando Sur, ubicado en el municipio de Palmira - Valle del Cauca, por orden judicial, desde el 25 de enero de 2022 hasta el 04 de diciembre de 2022 y, que desde su ingreso fue afectado por el hacinamiento, dado que dicho lugar presentaba un porcentaje de hacinamiento del 390%, según se afirma en el hecho 3 de la demanda.

Por tanto, conforme a las anteriores premisas, es claro que el demandante conoció de las condiciones de hacinamiento e insalubridad del centro de detención (hecho dañoso) y que es el fundamento de sus pretensiones, desde el mismo momento de su ingreso el 25 de enero de 2022.

Así las cosas, el término de caducidad se empezará a contabilizar a partir del día siguiente, es decir el 26 de enero de 2022 y fenecía el 26 de enero de 2024; la solicitud de conciliación fue presentada el 25 de junio de 2024, cuando ya había operado el fenómeno jurídico procesal de la caducidad y, sin haberse interrumpido dicho término, la radicación de la demanda se ejecutó el 29 de noviembre de 2024, más de diez meses después de haber fenecido el plazo fijado en el artículo 164 del C.P.A.C.A. Por lo tanto, es claro que ha operado el fenómeno jurídico de la caducidad.

¹⁰ Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Sala Plena – C.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico, 29 de enero de 2020, radicado No. 85001333300220140014401 (61.033), actor Juan José Coba Oroz y otros, demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros, medio de control. Reparación directa

6.2. De fondo

6.2.1. Inexistencia de nexo causal entre el daño alegado y la eventual acción u omisión de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC

Es importante iniciar destacando que para el presente asunto se tiene dos aspectos a destacar, el **i) la víctima directa tiene la condición de sindicado y ii) el lugar de reclusión es un centro transitorio, específicamente el Caí - Comando Sur, Palmira - Valle del Cauca.**

Luego entonces, dirijamos la mirada respecto a que autoridad le corresponde la responsabilidad legal para atender a las personas privadas de la libertad en condición de sindicadas, así:

Sea oportuno anotar que, en **Sentencia T-151/16** estable que la medida de detención preventiva puede cumplirse en cárceles para detención preventiva a cargo de las entidades territoriales, en un centro de detención preventiva anexos a ciudadelas judiciales, o en pabellones para detención preventiva en un establecimiento penitenciario para condenados, cuando así lo ameriten razones de seguridad, separados de las demás secciones de estos establecimientos.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido con el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, "Corresponde a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva." (*Subrayado fuera de texto*).

Con lo anterior, logramos constatar que en esta fase la ley asigna a las entidades territoriales la competencia respecto a las personas detenidas preventivamente o sindicadas; en consecuencia, no hay lugar a dudas en señalar la inexistencia del **nexo causal entre el daño alegado y la eventual acción u omisión respecto al régimen competencial de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC.**

Ahora bien, conforme lo explicado líneas arriba, el segundo punto de análisis se contestaría con lo argumentado en dichas líneas. Pues, la creación, administración, vigilancia y sostenimiento de los centros o cárceles de detención preventiva recae en las entidades territoriales. Luego entonces, no queda dudas

en reafirmar que en el presente proceso queda planteada la inexistencia del **nexo causal entre el daño alegado y la eventual acción u omisión respecto al régimen competencial de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC.**

Adicional a lo anterior, La Corte Constitucional, en Sentencia **SU122-2022¹¹**, reafirmo lo establecido en la Ley 65 de 1993, **dejando claro que las entidades territoriales tienen bajo su jurisdicción inspecciones, estaciones, subestaciones de Policía, URI y centros similares. De igual forma, ordeno a las entidades territoriales, entre otros, garantizar el suministro de la alimentación, el acceso a servicios de salud de urgencias y/o de control que requieran las personas detenidas y el acceso a servicios sanitarios y de agua potable de manera permanente**

Así las cosas, mi representada no puede ser responsabilizada por los hechos y pretensiones aducidos en la demanda, simple y llanamente, **porque no es la autoridad encargada de satisfacer los servicios a los internos (sindicados) reclusos en los centros de reclusión transitoria en las estaciones de policía existentes en el territorio nacional y, de manera particular el Caí- Comando Sur, ubicado en el municipio de Palmira.**

6.2.2. Sobre las obligaciones de las entidades territoriales respecto de personas privadas de la libertad (PPL)

En primer lugar, la Ley 65 de 1993 indica que es obligación de las entidades territoriales dirigir parte de su presupuesto para el sostenimiento de los centros de reclusión (art. 17). Así, en los casos en que no haya suficientes recursos dispuestos por el orden nacional para atender asuntos relativos al mantenimiento de las personas privadas de la libertad, el municipio o departamento deberá satisfacer esta necesidad con su propio presupuesto. En el mismo sentido, el artículo 17 de esta ley encarga a los municipios y departamentos del “sostenimiento” de los lugares de reclusión y dentro de este sostenimiento se entienden incluidos los gastos relativos a servicios fundamentales de las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, pues hacen parte de los gastos básicos e indispensables que tiene cualquier centro donde hay personas privadas de la libertad.

¹¹ <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2022/SU122-22.htm>

Además, esta misma norma establece con claridad que son las entidades territoriales quienes deben responder por las personas “detenidas preventivamente” y por las personas “sindicadas”. Dentro de esta obligación de “responder” se entiende incluida la obligación de proveer servicios de salud en caso de que no haya una provisión efectiva del servicio en las estaciones de policía. Estas obligaciones de las entidades territoriales respecto de estas personas privadas de la libertad han sido ratificadas por la Corte Constitucional mediante la Sala Especial de Seguimiento a las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, el Auto 121 de 2018, fundamento No. 80 y la sentencia T-151 de 2016.

Dentro de la Ley 1709 de 2014, se aclara que el gobierno nacional le entregará recursos a las entidades territoriales para que financien rubros como la salud de las personas privadas de la libertad que están a su cargo. Es decir, esta ley es prueba fehaciente de que las entidades territoriales ordinariamente cuentan con los recursos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993. Sobre el particular, el artículo 19A de la mencionada Ley 1709 de 2014 establece que:

“El Ministerio de Justicia y del Derecho promoverá la aprobación de un documento Conpes para garantizar la financiación de las obligaciones contenidas en los artículos 17 a 19 de la Ley 65 de 1993 y que están a cargo de las entidades territoriales. Los recursos para el financiamiento de que habla el presente artículo provendrán del Presupuesto General de la Nación.”

Tras la lectura de esta disposición normativa es forzoso concluir que las entidades territoriales cuentan con recursos de origen nacional para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los servicios fundamentales de las personas privadas de la libertad a su cargo. En este sentido, y entendiendo que estas entidades territoriales efectivamente disponen de estos recursos, se recuerda que tienen la obligación de utilizarlos con la destinación específica de cubrir los gastos de sostenimiento de las personas privadas de la libertad. En otras palabras, la disponibilidad de estos recursos tiene como contracara que las entidades territoriales deben hacer uso de los mismos al máximo de sus capacidades y aprovechándolos con eficacia para asegurar que las personas privadas de la libertad reciban los servicios necesarios y en condiciones idóneas. De lo contrario, los recursos dispuestos por el Presupuesto General de la Nación no están teniendo el destino que la ley les dio y por ende, los alcaldes y gobernadores estarían incumpliendo el objeto misional de los gobiernos que encabezan.

En el mismo sentido, la **Ley 715 de 2001** establece con claridad las obligaciones que tienen las entidades territoriales respecto de los centros de reclusión. El aparte relevante del artículo 76 de esta ley establece que:

*"ARTÍCULO 76. COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO EN OTROS SECTORES. Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, **corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios**, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:*

(...)

76.6. En materia de centros de reclusión

*Los municipios en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, podrán apoyar la **creación**, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad."*

Lo que esta norma establece con absoluta claridad es que los municipios deben utilizar recursos propios, del sistema general de participaciones, o de otras fuentes para apoyar la administración y sostenimiento de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad. Dentro de los gastos requeridos para la "administración y sostenimiento" de estos centros de reclusión están los relativos a la **creación de centros carcelarios**, que es de competencia exclusiva de los gobiernos municipales y departamentales, **y si se cumpliera, ayudaría en gran proporción a descongestionar los establecimientos carcelarios a cargo del INPEC.**

Además de los anteriores elementos normativos, existen pronunciamientos de los órganos de control colombianos que instan a los gobiernos de entidades territoriales a que se apersonen de sus obligaciones en materia carcelaria y penitenciaria. Por ejemplo, la Resolución Defensorial No. 069 de 2016 emite pronunciamientos en los que les recuerda a municipios y departamentos que tienen deberes específicos frente a las personas privadas de la libertad.

Según la Defensoría del Pueblo, también se advirtió a las asambleas departamentales y concejos municipales abstenerse de aprobar

presupuestos que no cumplieran con los requisitos establecidos en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario). Es decir, si algún proyecto de presupuesto departamental o municipal no contemplaba rubros para la eventual compra de materiales y suministros y equipos ligados a la prestación del servicio de salud para las personas privadas de la libertad bajo su jurisdicción, los cuerpos colegiados no podrían aprobar estos presupuestos. Esto conlleva una obligación correlativa de los alcaldes y gobernadores abstenerse de aprobar o sancionar presupuestos que no cumplan estas estrictas condiciones sobre los rubros relativos a gastos en salud.

Así mismo, la **Directiva 03 de 2014 de la Procuraduría General de la Nación insta a los entes territoriales a que cumplan sus obligaciones relativas al ámbito carcelario y las invita especialmente a realizar todo lo necesario para direccionar recursos y a ejecutar las “apropiaciones presupuestales pertinentes” para superar el estado de cosas inconstitucional imperante en los centros de reclusión.** Esta misma directiva invita a los municipios y departamentos a velar por la unificación de esfuerzos, para convenir el sostenimiento conjunto de los establecimientos de reclusión y elaborar y aprobar un programa para la generación de capacidades y de acompañamiento que las entidades puedan hacer para las personas sindicadas privadas de la libertad, así como gestionar recursos para el ámbito carcelario a través de la cooperación internacional.

En otra Directiva, la 002 del 7 de julio de 2016, la misma Procuraduría General de la Nación señaló que en los planes departamentales y municipales de desarrollo deben incluirse rubros para financiar las cárceles municipales o los convenios con el INPEC y recordó que este ente de control se ha comprometido a verificar que así sea. Estas obligaciones son especialmente exigibles para proteger el derecho de las PPL, cuya relación de sujeción al Estado hace imperativa una prestación óptima del servicio de salud.

Todo lo anterior fue planteado para concluir que las entidades territoriales tienen múltiples obligaciones respecto a las personas privadas de la libertad que están bajo su jurisdicción y, de acuerdo con lo establecido en este concepto, estas entidades están llamadas a responder con recursos y con gestión a las necesidades de estas personas privadas de la libertad, entendiendo que si las entidades territoriales cumplieran totalmente con este deber **el hacinamiento carcelario disminuiría o desaparecería en los establecimientos**

carcelarios del país. Por lo tanto, debe por parte de la USPEC insistirse en esa obligación ante las autoridades judiciales.

6.2.3. Imposibilidad de imputar fáctica o jurídicamente los daños alegados a la USPEC bajo ninguno de los dos regímenes de responsabilidad extracontractual.

a. En relación con el régimen de responsabilidad subjetivo

En relación con este título de imputación, el H. Consejo de Estado ha establecido:

*"[l]a falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía"*¹²

De conformidad con dicha regla, y a lo relativo al contenido obligacional que nutre el marco competencial y funcional de la USPEC, los daños alegados de forma alguna podrían ser imputados a mi representada bajo este título de imputación, **atendiendo a que la USPEC no es la entidad llamada a responder por estos hechos, dado que la Ley 65 de 1993 y la Sentencia SU-122 de 2022, encargan y descargan funciones a las entidades territoriales respecto a las personas detenidas (sindicados) en centros de detención transitoria.** En consecuencia, no existe fundamento ni sustento jurídico ni fáctico alguno, a partir del cual sea dable calificar que su prestación se dio de forma irregular o ineficiente, así como tampoco que la USPEC se ha sustraído, o ha prestado el servicio en forma tardía

b. En relación con el régimen de responsabilidad objetivo.

En relación con este título de imputación ha sostenido el H. Consejo de Estado:

¹² Consejo de Estado Colombiano, Sección Tercera, Sentencia del 7 de abril de 2011 expediente Nro 20750. MP Mauricio Fajardo Gómez.

"En diferentes ocasiones esta Corporación ha enmarcado la responsabilidad del Estado bajo el título de responsabilidad objetiva, teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentran las personas privadas de la libertad y conforme al artículo 90 de la Constitución Política, pues en estos casos se presentan relaciones especiales de sujeción. De acuerdo con lo anterior y en atención con los precedentes de la Sala que hoy atienden la responsabilidad del Estado conforme al régimen objetivo, la misma se sustenta en la tesis de "condiciones especiales de sujeción", en el entendido que: "(...) [E]l hecho de que una persona se encuentre internada en un centro carcelario implica la existencia de subordinación del recluso frente al Estado. Dicha subordinación produce, como consecuencia, que el recluso se encuentre en una "condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta", de la que se hace desprender una relación jurídica especial que se sustenta en la tensión entre la restricción, limitación o modulación y el respeto de los derechos del recluso, con especial énfasis por la tutela del derecho a la vida y a la integridad personal, los cuales no se limitan o suspenden por la propia condición o situación jurídica del recluso (...)""¹³

Al tenor de lo anterior, es necesario destacar que los daños alegados por la parte actora, tampoco podrían ser imputados a la USPEC a partir de dicho régimen de responsabilidad, como quiera que de conformidad con las competencias asignadas a mi representada, la USPEC no detenta una posición de garante o una intrínseca relación de especial sujeción respecto de la población privada de la libertad en centros de detención transitoria.

6.2.4. Ausencia de acreditación del daño antijurídico como primer elemento de la responsabilidad extracontractual.

Al tenor de lo expuesto en las razones de defensa que incorpora el presente escrito, en especial en el presente acápite y cuyos argumentos hago parte íntegra de la presente excepción.

Se tiene que la presente demanda no comporta vocación de prosperidad alguna, al no encontrarse plenamente acreditados los daños alegados por la parte actora, y en cuya virtud se pretende infundadamente comprometer la responsabilidad extracontractual del Estado.

¹³ Consejo de Estado Colombiano, Sentencia del 18 de mayo de 2017 expediente número 37497.

En relación con el daño, como primer elemento de la responsabilidad extracontractual, ha sostenido el H. Consejo de Estado Colombiano:

*"...[e]l daño antijurídico a efectos de que sea resarcible, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, se torna imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: **i)** debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; **ii)** que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente –que no se limite a una mera conjetura–, y que suponga una lesión a un derecho, bien o interés legítimo que se encuentre protegido el ordenamiento jurídico, y **iii)** que sea personal, es decir, que sea padecido por quien lo solicita, en tanto se cuente con la legitimación en la causa para reclamar el interés que se debate en el proceso”¹⁴*

En tal virtud, y de conformidad con el líbello demandatorio, se tiene que la parte demandante, únicamente se ciñe a establecer o enrostrar las circunstancias extraordinarias que aparentemente ocurrieron al interior del Caí- Comando Sur, Palmira - Valle del Cauca, **SIN ESTABLECER, CONCRETIZAR NI DETERMINAR DE FORMA ALGUNA ¿Cuáles fueron los hechos concretos, ciertos y personales que sufrió la parte demandante, y a raíz de los cuales sea dable acreditar el daño antijurídico alegado en lo que respecta a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC?**

En ese orden de ideas, es conveniente citar el objeto de creación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, y que según el artículo cuarto del Decreto 4150¹⁵ de noviembre 3 de 2011 es el siguiente:

“La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, tiene como objeto gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios d cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC”.

Una vez dejado en claro cuál es su objeto de creación, es pertinente indicar que no existe ninguna relación de causalidad con los hechos narrados por el actor, con el mismo, teniendo en cuenta que nada tienen que ver con la falla que se pretende endilgar.

¹⁴ CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN C, Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO Reparación Directa Radicado: 05001232500019942279 01 Sentencia del veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012)

¹⁵ Por el cual se crea la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, se determina su objeto y estructura

Así mismo, la Unidad, tampoco tiene competencia de vigilar y custodiar a la población privada de la libertad, tal y como ha quedado demostrado.

Entonces, reiteramos que los hechos originados por la víctima directa y narrados por el actor, los cargos citados por el mismo, no tienen una relación de causalidad con las funciones propias de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios —USPEC. Al respecto traemos a colación el pronunciamiento de la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-644 de 2011, así:

“La responsabilidad patrimonial del Estado, en nuestro sistema jurídico encuentra fundamento en el principio de la garantía integral de patrimonio de los ciudadanos, y se configura cuando concurren tres presupuestos fácticos a saber: un daño antijurídico o lesión, definido como el menoscabo o perjuicio que sufre la víctima en su patrimonio o en sus derechos personalísimos, sin tener el deber jurídico de soportarlo; una acción u omisión imputable al Estado, que se presenta cuando la Administración Pública no satisface las obligaciones a su cargo dentro de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que han sido fijadas; y una relación de causalidad, para que el daño antijurídico atribuido al Estado sea indemnizable, que exige que éste sea consecuencia de incumplimiento de las obligaciones de la Administración, esto es, desde una perspectiva negativa, que el daño sufrido por la víctima no se derivé de un fenómeno de fuerza mayor o sea atribuible a su conducta negligente”. (Subrayas fuera del texto)

Entonces en el caso materia de la presente no se cumplen con los tres requisitos exigidos teniendo en cuenta que en ningún momento el actor señala la acción u omisión en que pudo haber incurrido la Unidad de Servicios Penitenciarios Carcelarios -USPEC, ligada a una relación de causalidad con el hecho motivado por el actor, como bien lo señala la jurisprudencia citada, para que así se pueda configurar dicha situación.

Consideramos que los accionantes no han acreditado cada uno de los elementos constitutivos del daño antijurídico tendientes a demostrar la existencia de una posible falla por parte de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC, mucho menos cuando en la órbita funcional de la entidad **no se tiene obligación alguna respecto a la administración,**

sostenimiento y vigilancia del Caí- Comando Sur, Palmira, Valle del Cauca.

Sin embargo, al no ser plausible la posición de la parte actora, y ser imperiosa la acreditación del daño antijurídico en lo que la USPEC respecta, a fin de desplegar un estudio de imputación fáctica y jurídica, y al no haber sido acreditado, determinado, ni haber sido establecidas la titularidad o carácter personal del daño antijurídico cuya reparación se pretende, indefectiblemente nos encontramos ante un **daño eventual, incierto e hipotético**, que no comporta vocación de comprometer la responsabilidad extracontractual del Estado.

6.2.5. Genérica o innominada.

Solicito muy comedidamente al H. Señor Juez, declarar probada cualquiera otra excepción que halle probada de los argumentos expresados a lo largo del presente escrito, y que no haya sido señalada taxativamente en el presente escrito.

7. SOLICITUD:

De conformidad con los argumentos expresados a lo largo de la presente contestación de demanda, solicito muy comedidamente a su H. Señoría, desestimar todas y cada una de las pretensiones de la demanda incoada, declarando probadas las excepciones propuestas, o la que, de conformidad con los argumentos aquí señalados, su H. Despacho encuentre probada.

8. PRUEBAS:

Comedidamente solicito al H. Señor Juez otorgar valor probatorio a los siguientes documentos que remito con la presente contestación de demanda:

- a. Informe proyectos Subdirección de Seguimiento.
- b. Auto del 17 de julio de 2024, emitido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.
- c. Auto del 19 de julio de 2024, emitido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.
- d. Auto del 05 de agosto de 2024, emitido por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.
- e. Auto del 06 de agosto de 2024, emitido por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué.

- f. Providencia del 05 de septiembre de 2024 (Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora), Radicado No. 73001-33-33-009-2024-00141-01, emitido por el Tribunal Administrativo del Tolima.
- g. Providencia del 26 de septiembre de 2024 (Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora), Radicado No. 73001-33-33-009-2024-00117-01, emitido por el Tribunal Administrativo del Tolima
- h. Sentencia de segunda instancia del 26 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Segunda de Decisión.
- i. Oficio No. E-2023-007787 del 17/11/2023 (Respuesta derecho de petición).

9. ANEXOS.


Con la presente contestación adjunto los siguientes documentos:

- Poder especial debidamente otorgado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, como representante de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC.
- Resolución No. 000194 del 09 de abril de 2024, por medio de la cual se hace una delegación de la función de representación judicial y extrajudicial, en el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.
- Además de los enlistados en el acápite de pruebas.

10. NOTIFICACIONES

Para efectos de notificación, el suscrito apoderado las recibe en la Calle 26 A No. 69 - 76 Bogotá, Colombia – Oficina Asesora Jurídica- y a través de los correos electrónicos diego.nanez@uspec.gov.co y buzonjudicial@uspec.gov.co.

Atentamente,



DIEGO FABRIANNY NANEZ VIVEROS
C.C. No. 1.061.087.109
T.P No. 276.474 del C.S. de J

Proyectos Subdirección Seguimiento a la infraestructura

BOGOTÁ D.C., JUNIO 2024



Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios



Junio de 2024

En cumplimiento a los informes semestrales a presentar en virtud del DAÑO ANTIJURIDICO se comunica, que durante el período correspondiente a diciembre de 2023 y junio de 2024, la Dirección de Infraestructura a través de la Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura, viene adelantando las siguientes actividades en cumplimiento al proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN – NACIONAL, el cual tiene por Objeto "Aumentar el número de cupos penitenciarios y carcelarios para atender a la PPL"

1. Avances en la construcción de cupos en infraestructura Nuevos ERON

La USPEC avanza en el desarrollo de los siguientes proyectos para la construcción de 7.222 nuevos cupos, así:

ERON	Cupos proye ctados	% logrado corte junio 2024	Objeto	Año estimad o de entrega
ERON RENACIMIENTO en Sabanas de San Ángel	1974	34,25%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN Nacional (ERON) DE MEDIANA SEGURIDAD ETAPA I, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN SABANAS DE SAN ANGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE AJUSTE, PARA LO CUAL, ACTUALIZARÁ Y COMPLEMENTARÁ LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC.	2025
EPMSC RIOHACHA – GUAJIRA	1722	30,08%	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL – ERON DE MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE"	2025
EPMSC PEREIRA – RISARALDA FASE I	1.514	67,63%	CONSTRUCCIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DEL ORDEN NACIONAL ERON LA CONCORDIA PEREIRA RISARALDA.	2025

EPMSC PEREIRA - RISARALDA FASE II			SEGUNDA FASE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL ERON PEREIRA, QUE INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS EDIFICACIONES Y SISTEMAS DE LA FASE 2, ASÍ COMO LA DOTACIÓN REQUERIDA PARA EL ERON Y LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN INTEGRAL DEL ESTABLECIMIENTO.	2026
EPMSC SILVIA - CAUCA	500	Fase 1 PRE CONSTRUCC ION: 60%	CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON- DE MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN EL MUNICIPIO DE SILVIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA; POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LO QUE SE REQUIERE COMPLEMENTAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC"	2026
EPMSC BARRANCABERM EJA - SANTANDER	1.512	Fase 1 PRE CONSTRUCC ION: 69,68%	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON DE MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC.	2027

2. Avance Cupos en Ampliaciones

Estrategia a corto plazo para la generación de 1.036 nuevos cupos en ampliaciones

Durante el segundo semestre de la vigencia 2023 la USPEC da inicio a la construcción de nuevos pabellones en los establecimientos que cuentan con espacio disponible en su interior para su ampliación, en este sentido se presentan los siguientes avances

Establecimiento	Cupos	Estado
RM Cartagena	114	51,65 %
Pabellón Calarcá	304	Fase 1 pre construcción: 12 %
Pabellón 4 Bellavista	514	25,06 %
RM Barranquilla	104	25,35 %

3. **Otros espacios de construcción**

La USPEC adelanta la ejecución de actividades de obras complementarias que permitirá la operatividad de forma integral en las diferentes ampliaciones que se adelantan

ERON	Objeto	Avance %
EPMSC Girón	Construcción de un bloque de alojamiento de guardia y obras complementarias en el establecimiento de Girón	72%
EPMSC Ipiales	Construcción de un bloque de alojamiento de guardia y obras complementarias en el establecimiento de Ipiales	38, 1%
EPMSC Espinal	Vía conexión establecimiento, manejo de aguas superficiales	34,09%
EPAMS CAS-ERE - JP Itagüí	Construcción de las edificaciones de control de integración, rancho, depósito transitorio de residuos sólidos, cerramiento de seguridad; obras de urbanismo.	32,47%
EPMSC Barranquilla	Construcción de la edificación de control de acceso, cuatro garitas, un sector de cerramiento perimetral.	36,71%

Plan Maestro de Infraestructura

El desarrollo de un Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria implica una serie de logros y avances que buscan mejorar las condiciones y la eficiencia del sistema penitenciario. Actualmente el estado de esta actividad se encuentra en etapa de Ejecución de la FASE II que establece la formulación del documento técnico.

Para la formulación de este documentos la Dirección de Infraestructura cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto por diferentes profesionales y de diferentes disciplinas éstos profesionales adelantan el desarrollo de la fase II que corresponde a la formulación del documento, el cual contiene los hitos y componentes del sistema penitenciario como lo son parte legal y jurídica del predio, localización del establecimiento, componente arquitectónico y urbanístico, de instalaciones hidro-sanitarias, eléctricas, voz y dato, de seguridad y operatividad y demás componentes necesarios que nos permitan dar las pautas para tomar decisiones a tiempo para mejorar y aumentar la capacidad de cupos a nivel nacional en el Sistema Penitenciario y Carcelario; en esta fase de formulación se planean lo proyectos de acuerdo a las necesidades requeridas de cada centro penitenciario, con el cumplimiento de

las normas técnicas condición que nos arroja como resultado si es necesario la construcción de nuevas cárceles y la ampliación de las existentes para reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de vida de los PPL.

Actualmente se adelanta la actualización y análisis del Diagnóstico detallado de los establecimientos lo que ha permitido tener una radiografía exhaustiva de las instalaciones penitenciarias existentes, evaluando su estado actual, capacidades, deficiencias y necesidades.

En la metodología de trabajo implementada para la realización del plan maestro de infraestructura se está teniendo en cuenta la participación, la Inclusión y consulta con los principales actores que hacen parte del sistema penitenciario, como el personal penitenciario, reclusos, familiares, organizaciones de derechos humanos y la comunidad en general, para asegurar que sus necesidades y preocupaciones sean consideradas en el plan.

A su vez esta metodología permite que analicemos y tengamos en cuenta la proyección de la demanda futura de infraestructura carcelaria y penitenciaria basada en tendencias demográficas, tasas de criminalidad y políticas judiciales, para asegurar que las nuevas instalaciones puedan atender adecuadamente las necesidades a corto, mediano y largo plazo.

Acompañamiento y asesoría técnica a los entes territoriales asociados a población privada de la libertad en condición de sindicados.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) a través de la dirección de Infraestructura y en conformidad con los principios de colaboración y coordinación entre entidades públicas, continua brindando asesorías técnicas a través de reuniones virtuales y visitas presenciales a los municipios y entes territoriales que así lo requieran, facilitando así el desarrollo óptimo de los proyectos de cárceles transitorias, en plena conformidad con las normativas vigentes que regulan este tipo de infraestructura.

Actualmente, se realiza seguimiento a las comunicaciones establecidas con los entes territoriales. Esto permite mantener la trazabilidad de los comunicados recibidos por la unidad y de las respuestas proporcionadas

Guía de Lineamientos de Diseño para Establecimientos Carcelarios y Penitenciarios.

En conjunto con el equipo de trabajo de la Dirección de Infraestructura, estamos realizando las actividades que se requieren para la gestión del documento LINEAMIENTOS DE DISEÑO PARA ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, en pro del cumplimiento del Plan de acción institucional de la USPEC, el Estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria ECI y el CONPES 4089.

En este orden hemos participado en reuniones virtuales y presenciales, para la planificación, textualización y revisión del documento; donde gracias al plan de acción hemos expresado las ideas de manera clara y ordenada, redactando un borrador provisional que iremos ajustando y mejorando progresivamente.

Los avances los hemos desarrollado de acuerdo al plan de acción y metodología aprobada por la Subdirección de Infraestructura, que trata de gestionar el proyecto con la división en hitos o fases del proyecto completo, que se basan en intervalos de tiempo más cortos; a través del

cumplimiento y finalización de estas pequeñas fases, se va avanzando en todo momento. Promoviendo con esta técnica una amplia colaboración entre los miembros del equipo.

Por lo cual, se promueve un trabajo de detalle que contempla las siguientes fases y los siguientes edificios:

Fase 1: Guardia interna, Pabellón, Rancho, sanidad, alojamiento de guardia, garitas y cerramiento.

Fase 2: Talleres, áreas educativas, área visitas, guardia externa, edificio Administrativo, zona acopio, plantas y mantenimiento, portal de ingreso.

Los objetivos específicos para el desarrollo de cada fase se componen de:

1. Listado maestro de espacios.
2. Programa de necesidades.
3. Matriz de estándares estructurales de cada espacio arquitectónico.
4. Ficha de tipología de espacios.
5. Ficha estándar de carpintería.
6. esquema de ubicación y zonificación general.
7. Organigrama de Programa arquitectónico.
8. Proyecto Tipo.

Lo expuesto evidencia las gestiones administrativas, logísticas y contractuales de la USPEC en beneficio de los PPL reclusos en los centros de reclusión penitenciario y carcelario del orden nacional adscritos al INPEC, con el fin de minimizar el hacinamiento en estos centros de reclusión mejorando con esto las condiciones de habitabilidad de las personas privadas de la libertad, así como, en beneficio tanto del personal administrativo como del Cuerpo de Custodia que laboran en estos establecimientos.

Lo anterior para conocimiento y fines conducentes.

Atentamente,



ING. RAFAEL ALERTO GARCIA GARCIA
Director de Infraestructura

Vo. Bo.



ING. JUAN JOSE CASAS FRANCO MEDELLIN
Subdirector Seguimiento a la Infraestructura



JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

IBAGUÉ - TOLIMA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ

Ibagué, diecisiete de julio de dos mil veinticuatro

RADICACIÓN	73001-33-33-001-2024-00148-00
MEDIO DE CONTROL	REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE	MARLON STEVEN RIAÑO GUEVARA
DEMANDADOS	MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, NACIÓN - RAMA JUDICIAL, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS, NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL, y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Estando el presente asunto al despacho para estudio de admisión de la demanda, advierte el Despacho que debe verificarse si la demanda fue presentada oportunamente o si se configura el fenómeno jurídico de la caducidad.

Problema jurídico

¿La demanda de reparación directa fue presentada oportunamente o se configura el fenómeno jurídico de la caducidad?

Tesis del Despacho

La demanda de reparación directa no fue presentada oportunamente por haberse configurado el fenómeno jurídico de la caducidad.

Premisas jurídicas

El presente asunto debe ser estudiado a través del medio de control de reparación directa y bajo el amparo del artículo 90 de la Carta Política, según el cual, el Estado es responsable únicamente de los daños antijurídicos que le sean imputables por la acción u omisión de las autoridades públicas, constituyéndose de esta forma en el fundamento y marco general de la responsabilidad patrimonial estatal.

Al tenor de lo señalado el literal i del numeral 2 del artículo 164 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de 2 años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y, siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

En tratándose de acciones impetradas con miras a obtener la reparación de los daños generados con ocasión del hacinamiento padecido en un centro penitenciario y carcelario, el Consejo de Estado¹ al resolver un asunto análogo al ahora estudiado, precisó esa alta corporación judicial que, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño y, como quiera que en el caso estudiado por esa corporación el demandante había tenido conocimiento del hacinamiento existente en el centro de reclusión desde el 9 de marzo de 2000, desde esa fecha tenía conocimiento de las condiciones del centro carcelario, debiendo así contabilizarse la caducidad a partir del 10 de marzo de 2020.

¹ Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección C - Consejero Ponente: Guillermo Sánchez Luque, seis (6) de diciembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 05001-23-31-000-2002-04829-01(47148)

Premisas fácticas

El 12 de junio de 2024, el señor Marlon Steven Riaño Guevara, a través de apoderado judicial, instauró demanda de reparación directa en contra del Municipio de Ibagué, del Departamento del Tolima, la Nación - Rama Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, y la Fiscalía General de la Nación, a fin de obtener la reparación de los daños y perjuicios que le fueron ocasionados desde el 13 de diciembre de 2021 hasta el 13 de diciembre de 2022, mientras se encontró recluido en la Permanente Central de Ibagué.

El 19 de enero de 2023, el subintendente de la Policía Metropolitana de Ibagué, a través de oficio No. 2023-003124-METIB / COSEC-DISPO-29.25 del 19 de enero de 2023, certificó el porcentaje de hacinamiento carcelario existente en las salas de la permanente central de la Policía de Ibagué durante los años 2020 a 2023, indicando así que para el año 2020 existía un hacinamiento del 408%; para el 2021 del 514%; para el 2022 del 561%; y para el 2023 del 563%.²

Igualmente fue certificado con el oficio No. GS-2023-037424 METIB DISPO-ESTPO - 29.25 del 1° de junio de 2023, que el interno Marlon Steven Riaño Guevara, se encontró bajo la custodia en las instalaciones de la permanente central desde la fecha registrada en la boleta de detención No. 1095 desde el 13 de diciembre de 2021 hasta el 13 de diciembre de 2022, fecha en la cual ingreso al Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué.³

El 08 de abril de 2024, fue radicada la solicitud de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, del presente asunto ante la Procuraduría General de la Nación.

Conclusión

Descendiendo al caso concreto, debemos señalar que lo pretendido por la parte demandante, corresponde a la declaratoria de responsabilidad al considerar que el hacinamiento existente durante su periodo de reclusión en la penitenciaria central de Ibagué, le generó daños y perjuicios.

Así entonces, de conformidad con el pronunciamiento jurisprudencial del Consejo de Estado citado, el contenido de la documental aportada, así como de lo manifestado en el escrito de demanda por el apoderado judicial del demandante, se tiene que aquel tuvo conocimiento de la situación de hacinamiento desde el momento en que ingresó a la permanente central, esto es, el 13 de diciembre de 2021, debiendo contabilizarse el término de caducidad a partir del día siguiente.

Por lo anterior el demandante tenía hasta el 14 de diciembre de 2023, para presentar oportunamente la demanda. Sin embargo, presentó la solicitud de conciliación extrajudicial solamente hasta el 08 de abril de 2024, resultando evidente que en el caso bajo estudio se superó ampliamente el término concedido normativamente para la presentación oportuna del medio de control de reparación directa.

Así las cosas, el despacho encuentra configurado el fenómeno jurídico de la caducidad, como quiera que, para la fecha de presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial, el término con que contaba la parte demandante para interrumpir la ocurrencia de dicho fenómeno jurídico ya había vencido, razón por la cual la demanda debe ser rechazada, en aplicación del numeral 1 del artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

² Páginas 60 a 72 del archivo 003 anexos de la demanda

³ Página 08 del archivo 003 anexos de la demanda

Finalmente, por reunir con los requisitos establecidos en el artículo 74 y 75 del Código General del Proceso, el artículo 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 5 de la Ley 2213 de 2023, el despacho reconocerá personería al abogado Jorge Orjuela García, identificado con la cedula de ciudadanía No. 14.235.231 y tarjeta profesional No. 50.716 del consejo superior de la judicatura, y correo electrónico jorgeorjuela2@yahoo.es, inscrito en el registro nacional de abogados, para actuar como apoderado judicial del demandante en los términos y para los fines del poder conferido.

Por lo expuesto, el Despacho

RESUELVE

PRIMERO: Rechazar el presente medio de control reparación directa instaurado por el señor Marlon Steven Riaño Guevara en contra del Municipio de Ibagué, del Departamento del Tolima, la Nación - Rama Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, y la Fiscalía General de la Nación, conforme a la parte motiva de este auto.

SEGUNDO: Reconózcase personería al abogado Jorge Orjuela García, para actuar como apoderado judicial del demandante en los términos y para los fines del poder conferido.

Tercero: Por secretaría practíquense las anotaciones en el programa “SAMAI” y una vez en firme la decisión, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La Juez,

MARÍA PATRICIA VALENCIA RODRÍGUEZ

Firmado Por:
Maria Patricia Valencia Rodriguez
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Oral 1
Ibague - Tolima

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: aab3af8a2b487e3aa3b035dd21d97d8c44f705d08fed93f68ea7cdb7007efd2c
Documento generado en 17/07/2024 01:22:48 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



Rama Judicial

República de Colombia

JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

Ibagué, diecinueve (19) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Medio de control: Reparación Directa
Demandante: Andrés Felipe Jaramillo Díaz y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Radicación: 73001-33-33-003-**2024-00132-00**

OBJETO

Procede el Despacho a pronunciarse con respecto al **RECHAZO** de la demanda de la referencia, en los siguientes términos:

ANTECEDENTES

A través de apoderado judicial, el señor Andrés Felipe Jaramillo Díaz formula el medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Fiscalía General de la Nación, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -INPEC-, Departamento del Tolima y Municipio de Ibagué, con el fin de que se declare la responsabilidad de las entidades por todos los perjuicios causados a este con motivo a las condiciones de hacinamiento sufridas mientras estuvo detenido en las instalaciones de la Permanente Central de Ibagué – Tolima.

Narra la parte actora que estuvo recluso en las instalaciones del Permanente Central de Ibagué – Tolima en el periodo comprendido entre el 27 de agosto de 2021 hasta el 25 de abril de 2022 y que durante ese lapso presentó una constante vulneración de sus derechos fundamentales y de sus derechos humanos tales como el derecho a la vida, salud, dignidad humana, ambiente sano e integridad personal, entre otros, como consecuencia del hacinamiento que para esa época era del 561%.

CONSIDERACIONES

Existe una cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, cuyo fundamento constitucional está consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política, que preceptúa: *“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.”*, lo cual supone la responsabilidad de cualquier autoridad pública, no solo por el actuar antijurídico de sus agentes, sino también por sus acciones lícitas que aunque estén encaminadas a la satisfacción de los fines

esenciales del estado, devienen en antijurídicas, cuando imponen a los coasociados, una carga que no están en el deber jurídico de soportar.

En desarrollo de citado artículo constitucional, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo estableció en su artículo 140 el medio de control de reparación directa, a fin de que las personas que creyeran ser afectadas por un daño antijurídico del Estado demandaran la reparación de sus perjuicios.

ARTÍCULO 140. REPARACIÓN DIRECTA. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.

(...)”

Frente a la caducidad del medio de control de reparación directa, el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su numeral 2 literal i) prevé:

“ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:

(...)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(...)

i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

(...).”

El Consejo de Estado en providencia del 6 de diciembre de 2022¹ al resolver la apelación de una sentencia en un caso similar al presente, consideró que la caducidad en este caso debe contarse a partir de la fecha en que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que se tuvo conocimiento del daño:

“6. El fenómeno de caducidad para demandar se configura cuando vence el término previsto en la ley para acudir ante los jueces para demandar. Término que está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho opte por accionar ante las autoridades competentes. La caducidad tiene lugar cuando expira ese término perentorio fijado por la ley. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, según el

¹ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 6 de diciembre de 2022, radicación: 05001-23-31-000-2002-04829-01(47148) Consejero ponente: Guillermo Sánchez Luque

artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

(...)

El artículo 136 CCA dispuso que el punto de partida para el cómputo del término de caducidad es el hecho dañoso (acción u omisión causante del daño) y fijó el plazo para la interposición de la demanda en dos años, sin hacer distinciones sobre el tipo de daño que se cause. Por ello, basta verificar el día en que ocurrió el hecho, omisión u operación administrativa para contabilizar el plazo señalado, a menos que el perjudicado no hubiera podido conocer el daño en esa fecha, pues en este evento, la caducidad se debe contar desde que tuvo conocimiento de este⁷⁽²⁾

Así, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño⁸⁽³⁾

(...)

*Como el 9 de marzo de 2000, William Alberto Molina Sánchez solicitó a la entidad demandada terminar su condena en el centro carcelario del Distrito Judicial de Medellín Bellavista, desde esa fecha el demandante tenía conocimiento de las condiciones del centro carcelario. Por ello, el término de dos años para formular la demanda comenzó a correr a partir del 10 de marzo de 2000 (f. 150, c. 1) y venció el 10 de marzo de 2002. Como la demanda se presentó el 4 de diciembre de 2002, según da cuenta el sello de radicado (f. 23 c. 1), operó el fenómeno preclusivo de la caducidad y, en consecuencia, la Sala revocará la sentencia apelada.
(...)”*

CASO CONCRETO

Encuentra el Despacho que el señor Andrés Felipe Jaramillo Díaz estuvo en custodia en las instalaciones de la Permanente Central de Ibagué entre el 7 de agosto de 2021 hasta el 25 de abril de 2022, conforme la certificación emitida por la Policía Metropolitana de Ibagué (pág. 30- archivo DEMANDA PODER Y ANEXOS (.pdf) NroActua 3)

Por tanto, conforme a las anteriores premisas, es claro para el Despacho que el demandante conoció de las condiciones de hacinamiento e insalubridad del centro de detención (hecho dañoso) y que son el fundamento de sus pretensiones, desde el mismo momento de su ingreso el 7 de agosto de 2021, fecha para la que ya se presentaba un hacinamiento del 514%, como lo certificó la Policía Metropolitana de Ibagué, puesto que la capacidad de la permanente central de Policía era de 66 PPL y se encontraban allí 806 personas detenidas entre sindicados y condenados

(pág. 81-92 archivo DEMANDA PODER Y ANEXOS (.pdf) NroActua 3)

Así las cosas, el término para interponer la demanda, transcurrió desde el **8 de agosto de 2021**, esto es, al día siguiente de la fecha de detención en el Permanente Central y hasta el **8 de agosto de 2023**. Sin embargo, la solicitud de conciliación fue presentada el **10 de abril de 2024**, tal como se observa en la

² 7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de octubre de 2011, Rad. 20.692 [fundamento jurídico 3.1].

³ 8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de octubre de 2020, Rad. 61.767 [fundamento jurídico 4], con salvamento de voto.

certificación emitida por la Procuraduría 216 Judicial I para Asuntos Administrativos (pág. 162-170 archivo DEMANDA PODER Y ANEXOS (.pdf) NroActua 3), es decir, cuando ya habían vencido los dos años de caducidad a que hace alusión el artículo 164 del C.P.A.C.A., por lo que la misma determina el rechazo de plano de la demanda.

Con fundamento en lo anterior, el **Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué,**

RESUELVE

PRIMERO: Rechazar la presente demanda instaurada por Andrés Felipe Jaramillo Díaz y otros mediante apoderado judicial y en ejercicio del Medio de Control de Reparación Directa contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, Nación- Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Fiscalía General de la Nación, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -INPEC-, Departamento del Tolima y Municipio de Ibagué, de conformidad con las consideraciones de la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En firme esta decisión, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



DIANA CAROLINA MÉNDEZ BERNAL
Jueza

JUZGADO 3° ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ
NOTIFICACIÓN POR ESTADO
El auto anterior se notificó por estado del 22 de julio de 2024

Firmado Por:
Diana Carolina Mendez Bernal
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
Oral 3
Ibague - Tolima

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b4c486017245f289e83f21689bb4f447cb5e26d08b5a8a59ac9b6133a4f55708**

Documento generado en 19/07/2024 02:11:06 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



Rama Judicial

República de Colombia

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE IBAGUE

Ibagué, cinco (05) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Expediente: 73001-33-33-004-**2024-00130-00**
Medio De Control: REPARACIÓN DIRECTA
Demandantes: KEVIN JOHAN MURCIA RONDÓN
Demandado: MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y OTROS

Sería del caso proceder al estudio de admisión del presente medio de control de REPARACIÓN DIRECTA promovido por KEVIN JOHAN MURCIA RONDÓN, en contra del MUNICIPIO DE IBAGUÉ y Otros, de no ser porque se observa que en el *sub judice* ha operado el fenómeno jurídico de la caducidad, tal como se explica a continuación:

El artículo 164 del C.P.A.C.A., establece en su literal i) del numeral 2º, claramente el término para interponer la demanda de reparación directa, aduciendo lo siguiente:

“Art. 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (...)

2. En los siguientes términos so pena de que opere la caducidad: (...)

*i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de **dos (2) años**, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.*

Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición; (...)” (Resalta el despacho)

Así mismo, en un caso similar al presente asunto, en donde demandan por hacinamiento en un centro penitenciario y carcelario el H. Consejo de Estado señaló que la caducidad se cuenta desde que el interno tuvo conocimiento de la situación de hacinamiento:

“(...) El fenómeno de caducidad para demandar se configura cuando vence el término previsto en la ley para acudir ante los jueces para demandar. Término que está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho opte por accionar ante las autoridades competentes. La caducidad tiene lugar cuando expira ese término perentorio fijado por la ley. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, según el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

El término de caducidad establecido en el artículo 136 CCA es una norma de orden público -y por consiguiente de obligatorio cumplimiento (art. 6 CPC hoy retomado por el arto 13

CGP)- de la que no pueden disponer los jueces ni las partes, porque constituye una garantía para la seguridad jurídica y el interés general.

Así lo resaltó la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad de ese precepto, pues la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho. Por ende, según la Corte, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas en la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado, situación que no se extiende a quien no acudió en tiempo a la defensa de sus derechos.¹

Este criterio lo reiteró la Corte en el estudio de constitucionalidad del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136.9 CCA, al destacar que la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que apunta a la protección del interés general, de modo que su configuración impide el ejercicio de la acción y no puede iniciarse válidamente el proceso. También señaló que la caducidad, dado su carácter de orden público, es indisponible y puede ser declarada de oficio por el juez, cuando se verifique su ocurrencia.²

El artículo 136 CCA dispuso que el punto de partida para el cómputo del término de caducidad es el hecho dañoso (acción u omisión causante del daño) y fijó el plazo para la interposición de la demanda en dos años, sin hacer distinciones sobre el tipo de daño que se cause. Por ello, basta verificar el día en que ocurrió el hecho, omisión u operación administrativa para contabilizar el plazo señalado, a menos que el perjudicado no hubiera podido conocer el daño en esa fecha, pues en este evento, **la caducidad se debe contar desde que tuvo conocimiento de este.**³

Así, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño.⁴

(...)

Como el 9 de marzo de 2000, William Alberto Molina Sánchez solicitó a la entidad demandada terminar su condena en el centro carcelario del Distrito Judicial de Medellín Bellavista, **desde esa fecha el demandante tenía conocimiento de las condiciones del centro carcelario.** Por ello, el término de dos años para formular la demanda comenzó a correr a partir del 10 de marzo de 2000 (f. 150, c. 1) y venció el 10 de marzo de 2002. Como la demanda se presentó el 4 de diciembre de 2002, según da cuenta el sello de radicado (f. 23 c. 1), operó el fenómeno preclusivo de la caducidad y, en consecuencia, la Sala revocará la sentencia apelada.”

Ahora bien, aunque los anteriores planteamientos se hacen en relación con el derogado artículo 136 del CCA, no es menos cierto que encuentran plena relevancia frente a la norma vigente en tanto lo que se aclara es que la caducidad se debe contabilizar desde la data en que el accionante conoció o debió conocer el daño.

¹ Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-574 de 1998 [fundamento jurídico 3.5].

² Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001 [fundamento jurídico 4].

³ Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de octubre de 2011, Rad. 20.692 [fundamento jurídico 3.1].

⁴ Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de octubre de 2020, Rad. 61.767 [fundamento jurídico 4], con salvamento de voto.

En el presente caso la parte demandante pretende que le sea resarcido el presunto daño causado al señor Kevin Johan Murcia Rondón, daño que, según lo manifestado en el escrito de demanda, fue originado por el hacinamiento que sufrió mientras estuvo recluido en la permanente central de Ibagué, detención que se dio entre el **17 de octubre de 2021 al 13 de octubre de 2022**.

En concordancia con la jurisprudencia relacionada anteriormente, el despacho debe establecer la fecha exacta en que se configuró el inicio del evento que origina el daño supuestamente causado al demandante. Es así que con los anexos de la demanda se aporta el oficio No. GS-2023-037424-METIB/DISPO-ESTPO-29.25 del 1° de junio de 2023 suscrito por el Capitán Duvan Ferney Larrota Niño, supervisor de servicio adscrito a la Estación de Policía sur de la Metropolitana de Ibagué (Págs. 25 a 32 del índice 003 del expediente electrónico), en donde se puede verificar que el señor Murcia Rondón estuvo en calidad de detenido dentro de las instalaciones de la permanente central de Ibagué desde el 16 de septiembre de 2021 hasta el 25 de abril de 2022.

El señor **KEVIN JOHAN MURCIA RONDON**, identificado con cedula de ciudadanía de No. 1,007,787,946, quien se encontraba bajo custodia en las Instalaciones de la Permanente Central, conforme a lo dispuesto medida de aseguramiento del artículo 307 literal a, numeral 1, detención en establecimiento carcelario, bajo boleta de Detención No. 919 del 17/10/2021, emanada por el Juzgado promiscuo municipal de Cajamarca con funciones de control de garantías, por el delito hurto calificado, el cual fue recibido por el centro carcelario y penitenciario COIBA para el día 13/10/2022.

También, se aporta el oficio No. GS-2023-003124-METIB/COSEC-DISPO 29.25 del 19 de enero de 2023 suscrito por el Subintendente Oscar Mauricio Romero Gutiérrez, adscrito al Distrito Uno de la Policía Metropolitana de Ibagué (Págs. 78 a 89 del índice 003 del expediente electrónico), con el cual se da respuesta a la petición radicada por la abogada Diana Patricia Álvarez Ramírez. En este oficio se indica, entre otras cosas, lo siguiente:

- 1.- Se sirva indicar cuál es la capacidad total con la que cuenta la Permanente Central de la Policía de Ibagué para albergar detenidos, especificando de manera detallada el número de salas y capacidad de cada una de ellas.
- La permanente central tiene capacidad para 46 PPL y las antiguas instalaciones de espacio público para 20 PPL.

(...)

- 4.- Se sirva indicar si en la Permanente Central de la Policía de Ibagué existe hacinamiento carcelario. De ser afirmativa su respuesta, se sirva informar el porcentaje de hacinamiento existente en cada una de las salas que hacen parte de este recinto, en el periodo comprendido desde agosto de 2.020 hasta la fecha, precisando el porcentaje de hacinamiento mes a mes, es decir:

PERMANENTE CENTRAL	
AÑO	HACINAMIENTO
2020	408%
2021	514%
2022	561%
2023	563 %

(...)

Expediente: 73001-33-33-004-2024-00130-00
Medio De Control: REPARACIÓN DIRECTA
Demandantes: KEVIN JOHAN MURCIA RONDÓN
Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL y OTROS

8.- Se sirva manifestar cuántas horas al día se les permite a los detenidos recibir sol y ventilación.

- En la permanente central no tiene una infraestructura adecuada para que los PPL reciban el sol, teniendo en cuenta que es un lugar transitorio mientras son recibidos los PPL por un centro carcelario y penitenciario del INPEC.

Los anteriores documentos dan cuenta que cuando el señor Kevin Johan Murcia Rondón ingresó a las instalaciones de la permanente central de Ibagué (**17/octubre/2021**), ya existían las condiciones de hacinamiento (**514%**) que generan el supuesto daño reclamado en el presente medio de control.

Así las cosas, en el presente proceso el término de caducidad se contará desde el día siguiente a la fecha de ingreso del señor Murcia Rodón a la permanente central de Ibagué – **17 de octubre de 2021**-, teniendo en cuenta que es a partir de este acontecimiento que la parte demandante advierte las condiciones que le generan el presunto daño irrogado, razón por la cual el término establecido en el numeral 2°, literal i) del artículo 164 del CPACA debe contarse a partir del **18 de octubre de 2021** y la vigencia del medio de control iría entonces hasta el **18 de octubre de 2023**; término que no se demuestra suspendido con la solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, ya que dentro de los anexos que acompañan la demanda, aunque obra constancia de ese trámite (Págs. 159 a 164), fue solo hasta el **8 de abril de 2024** cuando se radicó la solicitud conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, fecha que está evidentemente fuera del término con que contaba la parte demandante para interponer el medio de control, antes que operara el fenómeno jurídico de la caducidad. Finalmente, la demanda sólo se presentó en la oficina judicial el **11 de junio de 2024**, tal como se desprende del registro generado por la oficina judicial de reparto, que se puede ver en la página 168 del índice 003 del expediente electrónico, por lo que es evidente que en el presente caso ha operado el fenómeno jurídico de la caducidad.

Por lo anteriormente expuesto, el Despacho

RESUELVE:

PRIMERO: RECHAZAR el presente medio de control de Reparación Directa interpuesto por KEVIN JOHAN MURCIA RONDÓN contra del MUNICIPIO DE IBAGUÉ y OTROS, por haber operado el fenómeno jurídico de la **CADUCIDAD**, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En firme esta providencia, por secretaría déjense las anotaciones de rigor en el aplicativo SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



SANDRA LILIANA SERENO CAICEDO

Jueza

Expediente: 73001-33-33-004-2024-00130-00
Medio De Control: REPARACIÓN DIRECTA
Demandantes: KEVIN JOHAN MURCIA RONDÓN
Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL y OTROS



Rama Judicial
República de Colombia

**JUZGADO 4° ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE IBAGUÉ**

NOTIFICACIÓN POR ESTADO ELECTRÓNICO

El auto anterior se notificó por Estado No. 35 de hoy
06 de agosto de 2024 siendo las 8:00 A.M.

El Secretario,





Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué

Auto interlocutorio No. 00179

Ibagué, seis (06) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

Medio de Control: REPARACIÓN DIRECTA
Demandante: RUBEN DARIO SANTACOLOMA
Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y OTROS
Radicación: 73001-33-33-010-2024-00139-00
Asunto: RECHAZA DEMANDA POR CADUCIDAD

Estando la presente actuación para resolver sobre la admisión del medio de control de reparación directa, entrará al Despacho a realizar el análisis de caducidad de la acción.

I. ANTECEDENTES

Pretende el apoderado de la parte actora que la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho – Ministerio de Defensa – Policía Nacional; Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; Fiscalía General de la Nación; Departamento del Tolima; Municipio de Ibagué; Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-, sean declarados administrativamente responsables por los perjuicios morales, materiales y derechos constitucionalmente protegidos, causados a Rubén Darío Santacoloma, debido a las condiciones de hacinamiento sufridas desde el día 19 de julio de julio del 2021 hasta el 09 de agosto de 2022, mientras se encontraba detenido las Instalaciones de la Permanente Central de Ibagué.

II. CONSIDERACIONES

La caducidad es un fenómeno jurídico en virtud del cual se pierde la facultad de accionar ante la jurisdicción por no haber ejercido su derecho dentro del término que señala la ley.

El artículo 164 No. 2 literal i del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, frente a la oportunidad para presentar la demanda de reparación directa consagra:

“Art.164. La demanda deberá ser presentada:

(...)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(...)

i. Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

(...)” (Negrilla fuera del texto)

III. CASO CONCRETO

En el caso bajo estudio, se observa que lo pretendido por la apoderada de la parte accionante subyace en la obtención de la indemnización por los perjuicios morales, materiales y derechos constitucionalmente protegidos, causados a Rubén Darío Santacoloma, debido a las condiciones de hacinamiento sufridas desde el día 19 de julio de julio del 2021 hasta el 09 de agosto de 2022, mientras se encontraba detenido en las Instalaciones de la Permanente Central de Ibagué.

Del material probatorio aportado por el apoderado de la parte actora, está demostrado que el señor Rubén Darío Santacoloma fue capturado el día 19 de julio de 2021 por la conducta punible de hurto calificado, de acuerdo a la boleta de detención No.584 emitida por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Ibagué, detención que inicialmente estuvo a cargo de la Policía Metropolitana de Ibagué en las instalaciones del permanente central hasta el día 09 de agosto de 2022, fecha en la cual fue trasladado a las instalaciones del Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué COIBA.

Ahora bien, con el fin de establecer el término de caducidad, en un caso similar donde se demanda por hacinamiento en un centro penitenciario y carcelario, el Consejo de Estado consideró que la caducidad se contabiliza desde el momento que el interno tuvo conocimiento de la situación de hacinamiento:

“(...) 6. El fenómeno de caducidad para demandar se configura cuando vence el término previsto en la ley para acudir ante los jueces para demandar. Término que está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho opte por accionar ante las autoridades competentes. La caducidad tiene lugar cuando expira ese término perentorio fijado por la ley. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, según el artículo 136.8 CCA es de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

(...)

El artículo 136 CCA dispuso que el punto de partida para el cómputo del término de caducidad es el hecho dañoso (acción u omisión causante del daño) y fijó el plazo para la interposición de la demanda en dos años, sin hacer distinciones sobre el tipo de daño que se cause. Por ello, basta verificar el día en que ocurrió el hecho, omisión u operación administrativa para contabilizar el plazo señalado, a menos que el perjudicado no hubiera podido conocer el daño en esa fecha, pues en este evento, la caducidad se debe contar desde que tuvo conocimiento de este.

Así, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño.

(...)”

Como el 9 de marzo de 2000, William Alberto Molina Sánchez solicitó a la entidad demandada terminar su condena en el centro carcelario del Distrito Judicial de Medellín Bellavista, desde esa fecha el demandante tenía conocimiento de las condiciones del centro carcelario. Por ello, el término de dos años para formular la demanda comenzó a correr a partir del 10 de marzo de 2000 ... (...).¹

De lo anteriormente indicado, el despacho considera que el señor Rubén Darío Santacoloma, desde el primer día de reclusión, tuvo conocimiento del hacinamiento al cual presuntamente fue sometido en las instalaciones del Permanente Central de la Policía Metropolitana de Ibagué, prueba de ello es el Oficio GS-2023-003124 del 19 de enero de 2024² emitido por el subintendente de la Policía Metropolitana de Ibagué, donde se le informa al apoderado de la parte actora, el porcentaje de hacinamiento para el año 2021 en las instalaciones del Permanente Central de Ibagué, el cual correspondía al 514%, con un total de 625 sindicados y 182 condenados, datos que permiten entender la magnitud de hacinamiento para la fecha en que ingreso el señor Santacoloma a las instalaciones del Permanente.

En consideración a lo anterior, el término para contabilizar la caducidad del presente medio de control se contabilizará a partir de la fecha en la cual el señor Rubén Darío Santacoloma ingreso a las instalaciones del Permanente Central de Ibagué, es decir, el 19/07/2021; por lo que el término se empezará a contabilizar a partir del día 20 del mismo mes y año, razón por la cual, la demanda podía ser radicada hasta el 19/07/2023, es decir,

¹ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C, Radicación número: 05001-23-31-000-2002-04829-01(47148) consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE.

² Fol.78 archivo 3 del expediente digital

que cuando radica la solicitud de conciliación extrajudicial el 08/04/2024, la constancia se expidió el 7/06/2024; y como quiera que el presente medio de control fue radicado en la oficina de reparto el 12/06/2024³, es claro que se presentó por fuera del término otorgado por la ley.

Por lo anterior, y como quiera que la conciliación y por ende la demanda fueron presentadas por fuera del término legal antes referenciado (2 años), se rechazará de plano de conformidad con lo establecido en numeral 1 del artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Por lo anteriormente expuesto, el **Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué,**

R E S U E L V E:

PRIMERO: RECHAZAR DE PLANO la demanda de REPARACIÓN DIRECTA presentada por **RUBEN DARIO SANTACOLOMA**, por haber operado el fenómeno de la caducidad de la acción, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO. En firme esta decisión, devuélvase la demanda y los anexos sin necesidad de desglose y archívese el expediente previas las constancias de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS MANUEL GUZMAN
JUEZ

JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUE
Notifico por ESTADO ELECTRÓNICO
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-10-administrativo-de-ibague/71>
Hoy **08 de agosto de 2024** a las 08:00 A.M.

JUANA YURLEY MENA LLOREDA
Secretaria

Firmado Por:
Luis Manuel Guzman
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
10
Ibague - Tolima

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

³ [02ActaReparto](#)

Código de verificación: **169a49b400c7d4180bf6c084061f79e3be7a346bfdaceedd1f90889e274a942a**
Documento generado en 06/08/2024 10:00:14 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
MAG. PONENTE: DR. BELISARIO BELTRÁN BASTIDAS

Ibagué, cinco (05) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

RADICACION:	73001-33-33-009-2024-00141-01
MEDIO DE CONTROL:	REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE:	CESAR ANDRÉS ESCOBAR SEPÚLVEDA Y OTROS.
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y OTROS
TEMA:	CADUCIDAD

OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora, contra la providencia dictada el 27 de junio de 2024, mediante la cual el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué, resolvió rechazar la demanda, por haber operado en fenómeno jurídico de caducidad.

ANTECEDENTES

El señor RICARDO ROA ESCARRAGA, quien actúa en nombre propio y en nombre y representación de DAIANYS JULIETH ROA ESCARRAGA; de CESAR ANDRES ESCOBAR SEPULVEDA y GRACIELA SEPULVEDA de OSCOBAR; de JESUS DAVID CASTRO MORALES, quien actúa en nombre propio y en nombre y representación de DAVID SANTIAGO CASTRO RAMIREZ; LIDA MORALES, CAROL ADRIANA CASTRO MORALES, EMIYOJANA CASTRO MORALES y PAOLA ANDREA CASTRO MORALES; de NICOLAS BONILLA FERNANDEZ; NUBIA ARGENIS FERNANDEZ MELO, quien actúa en nombre propio y en nombre y representación de JUAN FELIPE MELO FERNANDEZ; de DAVID CAMILO MONTENEGRO RAIGOZA; de LENIN CORTES HERRERA, a través de apoderado judicial, instauraron el medio de control de Reparación Directa contra el MUNICIPIO DE IBAGUÉ, EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, LA NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA NACIÓN - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLÍCIA NACIONAL y LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con el fin que se le concedieran las siguientes:

PRETENSIONES

“DECLARACIONES Y CONDENAS

1.- *Que el MUNICIPIO DE IBAGUÉ, EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, LA NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA NACIÓN - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLÍCIA NACIONAL y LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, son responsables administrativamente por todos los perjuicios morales, materiales y perjuicios a los derechos constitucionalmente protegidos, causados a LUIS MIGUEL CUBILLOS DIAZ y MIRIAN DIAZ GARZON, como consecuencia de las condiciones de hacinamiento sufridas por LUIS MIGUEL CUBILLOS DIAZ, desde el día 01 de diciembre de 2.020 hasta el día 24 de noviembre de 2.021, o el tiempo que se logre de demostrar en el transcurso del proceso, mientras se encontraba detenido las Instalaciones de la Permanente Central de Ibagué - Tolima*

2.- *Que como consecuencia de la anterior declaración el MUNICIPIO DE IBAGUÉ, EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, LA NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA NACIÓN - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLÍCIA NACIONAL y LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, deben a LUIS MIGUEL CUBILLOS DIAZ y MIRIAN DIAZ GARZON, la totalidad de los perjuicios morales, materiales y perjuicios a los derechos constitucionalmente protegidos, de conformidad con la liquidación que de ellos se haga más adelante.*

3.- *Que el MUNICIPIO DE IBAGUÉ, EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, LA NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA NACIÓN - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLÍCIA NACIONAL y LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN son responsables administrativamente por todos los perjuicios morales, materiales y perjuicios a los derechos constitucionalmente protegidos, causados a RICARDO ROA ESCARRAGA, quien actúa en nombre propio y en nombre y representación de su menor hija DAIANY JULIETH ROA ESCARRAGA, como consecuencia de las condiciones de hacinamiento sufridas por RICARDO ROA ESCARRAGA, desde el día 27 de marzo de 2.021 hasta el día 12 de abril de 2.022, o el tiempo que se logre de demostrar en el transcurso del proceso, mientras*

se encontraba detenido las Instalaciones de la Permanente Central de Ibagué - Tolima.

4.- Que como consecuencia de la anterior declaración el MUNICIPIO DE IBAGUÉ, EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, LA NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA NACIÓN - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL y LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, deben a RICARDO ROA ESCARRAGA, quien actúa en nombre propio y en nombre y representación de su menor hija DALANYS JULIETH ROA ESCARRAGA, la totalidad de los perjuicios morales, materiales y perjuicios a los derechos constitucionalmente protegidos, de conformidad con la liquidación que de ellos se haga más adelante.

5.- Que el MUNICIPIO DE IBAGUÉ, EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, LA NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA NACIÓN - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL y LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, son responsables administrativamente por todos los perjuicios morales, materiales y perjuicios a los derechos constitucionalmente protegidos, causados a CESAR ANDRES ESCOBAR SEPULVEDA y GRACIELA SEPULVEDA de ESCOBAR, como consecuencia de las condiciones de hacinamiento sufridas por CESAR ANDRES ESCOBAR SEPULVEDA, desde el día 19 de marzo de 2.021 hasta el día 23 de diciembre de 2.021, o el tiempo que se logre de demostrar en el transcurso del proceso, mientras se encontraba detenido las Instalaciones de la Permanente Central de Ibagué - Tolima.

6.- Que como consecuencia de la anterior declaración el MUNICIPIO DE IBAGUÉ, EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, LA NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA NACIÓN - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL y LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, deben a CESAR ANDRES ESCOBAR SEPULVEDA y GRACIELA SEPULVEDA de ESCOBAR, la totalidad de los perjuicios morales, materiales y perjuicios a los derechos constitucionalmente protegidos, de conformidad con la liquidación que de ellos se haga más adelante.

7.- Que el MUNICIPIO DE IBAGUÉ, EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, LA NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA NACIÓN - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL y LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, son responsables administrativamente por todos los perjuicios morales, materiales y perjuicios a los derechos constitucionalmente protegidos, causados a JESUS DAVID CASTRO MORALES, quien actúa en nombre propio y en nombre y representación de DAVID SANTIAGO CASTRO RAMÍREZ; a LIDA MORALES, CAROL ADRIANA CASTRO MORALES, EMIYOJANA CASTRO MORALES y PAOLA ANDREA CASTRO MORALES, en sus calidades conocidas, como consecuencia de las condiciones de hacinamiento sufridas por el señor JESUS DAVID CASTRO MORALES, desde el día 19 de agosto de 2.021 hasta el 21 de diciembre de 2.021, o el tiempo que se logre demostrar en el transcurso del proceso, mientras se encontraba detenido las Instalaciones de la Permanente Central de Ibagué - Tolima.

8.- Que como consecuencia de la anterior declaración, el MUNICIPIO DE IBAGUÉ, EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, LA NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA NACIÓN - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL y LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, deben a JESUS DAVID CASTRO MORALES, quien actúa en nombre propio y en nombre y representación de DAVID SANTIAGO CASTRO RAMÍREZ; a LIDA MORALES, CAROL ADRIANA CASTRO MORALES, EMIYOJANA CASTRO MORALES y PAOLA ANDREA CASTRO MORALES, la totalidad de los perjuicios morales, materiales y perjuicios a los derechos constitucionalmente protegidos, de conformidad con la liquidación que de ellos se haga más adelante.

9.- Que el MUNICIPIO DE IBAGUÉ, EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, LA NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA NACIÓN - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL y LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, son responsables administrativamente por todos los perjuicios morales, materiales y perjuicios a los derechos constitucionalmente protegidos, causados a NICOLAS BONILLA FERNANDEZ; a NUBIA ARGENIS FERNANDEZ MELO, quien actúa en nombre propio y en nombre y representación de su menor hijo JUAN FELIPE MELO FERNANDEZ; a PAULA ANDREA BONILLA FERNANDEZ, como consecuencia de las condiciones de hacinamiento sufridas por el señor NICOLAS BONILLA FERNANDEZ, desde el día 19 de agosto de 2.021

hasta el día 21 de diciembre de 2.021, o el tiempo que se logre demostrar en el transcurso del proceso, mientras se encontraba detenido en las Instalaciones de la Permanente Central de Ibagué - Tolima.

10.- *Que como consecuencia de la anterior declaración, el MUNICIPIO DE IBAGUÉ, EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, LA NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA NACIÓN - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL y LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, deben a NICOLAS BONILLA FERNANDEZ; a NUBIA ARGENIS FERNANDEZ MELO, quien actúa en nombre propio y en nombre y representación de su menor hijo JUAN FELIPE MELO FERNANDEZ; a PAULA ANDREA BONILLA FERNANDEZ, la totalidad de los perjuicios morales, materiales y perjuicios a los derechos constitucionalmente protegidos, de conformidad con la liquidación que de ellos se haga más adelante.*

11.- *Que el MUNICIPIO DE IBAGUÉ, EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, LA NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA NACIÓN - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL y LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, son responsables administrativamente por todos los perjuicios morales, materiales y perjuicios a los derechos constitucionalmente protegidos, causados a DAVID CAMILO MONTENEGRO RAIGOZA, como consecuencia de las condiciones de hacinamiento sufridas, desde el día 19 de marzo de 2.021 hasta el día 12 de abril de 2.022, o el tiempo que se logre demostrar en el transcurso del proceso, mientras se encontraba detenido en las Instalaciones de la Permanente Central de Ibagué - Tolima.*

12.- *Que como consecuencia de la anterior declaración, el MUNICIPIO DE IBAGUÉ, EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, LA NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA NACIÓN - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL y LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, deben a DAVID CAMILO MONTENEGRO RAIGOZA, la totalidad de los perjuicios morales, materiales y perjuicios a los derechos constitucionalmente protegidos, de conformidad con la liquidación que de ellos se haga más adelante*

13.- Que el MUNICIPIO DE IBAGUÉ, EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, LA NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA NACIÓN - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL y LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, son responsables administrativamente por todos los perjuicios morales, materiales y perjuicios a los derechos constitucionalmente protegidos, causados a LENIN CORTES HERRERA, como consecuencia de las condiciones de hacinamiento sufridas, desde el día 06 de abril de 2.021 hasta el día 21 de diciembre de 2.021, o el tiempo que se logre demostrar en el transcurso del proceso, mientras se encontraba detenido en las Instalaciones de la Permanente Central de Ibagué - Tolima

14.- Que como consecuencia de la anterior declaración, el MUNICIPIO DE IBAGUÉ, EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, LA NACIÓN - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA NACIÓN - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL y LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, deben a LENIN CORTES HERRERA, la totalidad de los perjuicios morales, materiales y perjuicios a los derechos constitucionalmente protegidos, de conformidad con la liquidación que de ellos se haga más adelante. 15.- Que la demandada cumpla la sentencia en los términos del artículo 140 del C.P.A.C.A. 16.- Por las costas y gastos del proceso."

Las anteriores pretensiones las sustenta en los siguientes

HECHOS

El apoderado judicial de la parte actora, manifiesta que sus prohijados, estuvieron privados de la libertad por diversos delitos en las instalaciones de la permanente central de Ibagué- Tolima.

Sostiene, que durante el tiempo que sus prohijados estuvieron privados de la libertad, lo hicieron sufriendo un porcentaje de hacinamiento que superaba el 500%, albergando más personas de las que podían soportar, vulnerando los derechos fundamentales de los actores y sus derechos humanos tales como el derecho a la vida, salud, dignidad humana, ambiente sano e integridad personal, entre otros.

Lo anterior, como consecuencia del hacinamiento, aludiendo, que con ello constituye un trato cruel, inhumano y degradante, ocasionando sufrimiento

moral, aflicción y tristeza al directo afectado y su madre, por lo cual se configuraría en una falla del servicio que ocasionó los perjuicios morales, materiales y perjuicios a los derechos constitucionalmente protegidos a los demandantes que la administración está en la obligación de resarcir.

Arguye, que los directos afectados tienen su núcleo familiar, con quien siempre ha mantenido estrechos lazos de afecto, por lo que el hacinamiento carcelario sufrido por su ser querido les ha generado la causación de los perjuicios morales causados.

PROVIDENCIA IMPUGNADA

Mediante providencia del 27 de junio de 2024, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué resolvió rechazar la demanda, al considerar que había operado el fenómeno jurídico de la caducidad.

Como fundamento de su decisión, expresó que el Consejo de Estado ha sostenido que en los casos en que se ventile una falla del servicio como consecuencia del hacinamiento, el fenómeno de caducidad se debe contar a partir desde que el interno tuvo conocimiento de la situación de hacinamiento.

Por consiguiente, arguye que de las pruebas aportadas al cartulario, se desprende que desde la fecha en que ingresaron los demandantes a la permanente central el 19 de marzo de 2021 conoció del hacinamiento que durante ese año era del 514%, luego entonces desde esa fecha debe iniciarse el conteo de la caducidad, por lo que tenía hasta el 20 de marzo de 2023 para interponer la demanda de reparación directa.

Sin embargo, precisó que cuando radicó la solicitud de conciliación extrajudicial el 18 de diciembre de 2023 ya había operado dicho fenómeno procesal, y por ende, cuando radica la demanda el 11 de marzo de 2024, permite dilucidar el medio de control de reparación directa le había operado el fenómeno jurídico de la caducidad.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada judicial de la parte actora presentó recurso de apelación, argumentando que el término de caducidad del medio de control de reparación directa se debe interpretar no solo desde que se realice el conocimiento del hecho, sino también en qué circunstancia se conoce y hasta donde se extiende.

En este sentido, manifiesta que si bien es cierto desde el 19 de marzo de 2021 el señor CESAR ANDRÉS ESCOBAR SEPÚLVEDA estuvo privado de su libertad, su captura se prolongó hasta el 23 de diciembre de 2021, afirmando que con ello se denota que el daño se prolongó en el tiempo, por lo que este finiquitó hasta el día que dejó de sufrir las consecuencias del hacinamiento.

Por lo cual, señala que no puede considerarse para efectos del fenómeno de la caducidad del medio de control de la referencia la fecha de detención del privado de la libertad, por cuanto se estaría dejando por fuera de la órbita procesal el último día en el que este estuvo detenido en la Permanente Central, día en el que cesó el perjuicio por causa del hacinamiento.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Es competente esta corporación para resolver la impugnación de la referencia de conformidad con el numeral 1º del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo.

Problema jurídico.

La controversia jurídica se centra en determinar si en el presente caso ha operado o no el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de reparación directa.

Estudio sustancial.

El término de caducidad está edificado sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo, sin consideración a situaciones personales, invariable, para que quien se pretenda titular de un derecho opte por accionar o no.

Es por lo anterior, que se da aplicación a la máxima latina “*contra non volenten agere non currit prescriptio*”, es decir, que el término de caducidad no puede ser materia de convención, antes de que se cumpla, ni después de transcurrido puede renunciarse.

Dicho de otro modo, el término para accionar no es susceptible de interrupción, ni de renuncia por parte de la Administración. Es, que el término prefijado por la ley, obra independientemente y aún contra la voluntad del beneficiario de la acción.

La caducidad es la consecuencia de la expiración del término perentorio fijado, para el ejercicio de la acción.

La facultad potestativa de accionar, comienza con el plazo prefijado y nada obsta para que se ejercite desde el primer día, pero fenece definitivamente al caducar o terminar el plazo, improrrogable¹.

El artículo 164 numeral 2, literal i, de la Ley 1437 de 2011, establece la oportunidad para presentar la demanda so pena de que opere la caducidad para la reparación directa.

Conforme lo anterior, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del **daño**, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Así lo establece la norma en su literal i):

“(…)

*i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, **contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo** si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.” (Negrilla fuera del texto original).*

En tanto que el artículo 161 ibídem, en su numeral primero indica como requisito previo para demandar, el trámite de conciliación extrajudicial:

*“1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, **reparación directa** y controversias contractuales.” (Negrilla fuera del texto original)*

En relación con la suspensión del término de caducidad del medio de control, dispone el artículo 3 del Decreto 1716 de 2003:

*“**Artículo 3**. Suspensión del término de caducidad de la acción. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta:*

a. Que se logre el acuerdo conciliatorio, o

¹ Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 11 de mayo de 2000, expediente 12.200.

*b. Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2° de la Ley 640 de 2001, o Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; **lo que ocurra primero.** (Negrilla fuera del texto original)*

Ahora bien, el numeral primero del artículo 161 de la ley 1437 de 2011 estableció como requisito de procedibilidad para demandar el trámite de la conciliación extrajudicial, así:

“ARTÍCULO 161. REQUISITOS PREVIOS PARA DEMANDAR. La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:

1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.

En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente prohibida (...).”

CASO CONCRETO

En el caso sub judice, se tiene que los demandantes instauran el presente medio de control de reparación directa, solicitando que se declare la responsabilidad extracontractual alegando una presunta falla del servicio, en virtud a los perjuicios causados por el hacinamiento que tuvieron que padecer los actores, como lo fue la del señor CESAR ANDRÉS ESCOBAR SEPÚLVEDA, durante el tiempo que estuvo privado de la libertad en las instalaciones de la permanente central de Ibagué-Tolima.

Mediante providencia del 27 de junio de 2024, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué resolvió rechazar la demanda, por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad, aludiendo, que en los casos en que se ventile una falla del servicio como consecuencia del hacinamiento, el fenómeno de caducidad se debe contar a partir desde que el interno tuvo conocimiento de la situación de hacinamiento, y en este caso tuvieron conocimiento desde el 19 de marzo de 2021, por lo que tenía hasta el 20 de marzo de 2023 para interponer la demanda de reparación directa, y al haber radicado la solicitud de conciliación extrajudicial el 18 de diciembre de 2023, se dilucida que ya había operado el fenómeno de caducidad.

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada judicial de la parte actora presentó recurso de apelación, argumentando que el término de caducidad

del medio de control de reparación directa se debe contabilizar desde el 23 de diciembre de 2021, fecha en la que salieron en libertad, y con ello, se denota que el daño se prolongó en el tiempo, por lo que este finiquitó hasta el día que dejó de sufrir las consecuencias del hacinamiento.

Establecido lo anterior, y dado que el génesis de la presente controversia se suscita en establecer el momento a partir del cual inicia el cómputo de la caducidad, la Sala considera necesario distinguir ante qué tipo de daño nos encontramos, es decir, si ante un daño instantáneo o continuado, con el propósito de definir el inicio del plazo procesal del presente medio de control.

En este sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en Sentencia del 06 de diciembre de 2022, C.P: Guillermo Sánchez Luque, proferida dentro del proceso con radicación No. 05001-23-31-000-2002-04829-01, se pronunció sobre el fenómeno de caducidad en los casos en que alegue una falla del servicio derivada por el hacinamiento carcelario, para lo cual señaló lo siguiente:

“Así lo resaltó la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad de ese precepto, pues la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho. Por ende, según la Corte, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas en la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado, situación que no se extiende a quien no acudió en tiempo a la defensa de sus derechos.

Este criterio lo reiteró la Corte en el estudio de constitucionalidad del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136.9 CCA, al destacar que la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que apunta a la protección del interés general, de modo que su configuración impide el ejercicio de la acción y no puede iniciarse válidamente el proceso. También señaló que la caducidad, dado su carácter de orden público, es indisponible y puede ser declarada de oficio por el juez, cuando se verifique su ocurrencia.

El artículo 136 CCA dispuso que el punto de partida para el cómputo del término de caducidad es el hecho dañoso (acción u omisión causante del daño) y fijó el plazo para la interposición de la demanda en dos años, sin hacer distinciones sobre el tipo de daño que se cause. Por ello, basta verificar el día en que ocurrió el hecho, omisión u operación administrativa para contabilizar el plazo señalado, a menos que el perjudicado no hubiera podido conocer el daño en esa fecha, pues en este evento, la caducidad se debe contar desde que tuvo conocimiento de este

Así, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño.”(Negrilla y subraya fuera del texto original)

Aunado a ello, se tiene que dicha sentencia fue objeto de tutela, la cual fue conocida y resulta por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con providencia del 05 de octubre de 2023, C.P: César Palomino Cortés, dentro del proceso con radicación No. 11001-03-15-000-2023-02769-01, en la cual negó el amparo deprecado, al considerar que la sentencia se encontraba ajustada a derecho y que no había transgredido garantías y derechos fundamentales, para lo cual sostuvo lo siguiente:

“(…) En este contexto, se tiene que lo que originó el daño sufrido por el tutelante, fue la reclusión en el centro carcelario en las condiciones de hacinamiento hecho que no eran imposible de conocer para el señor William Alberto Molina Sánchez, pues tal y como lo ha señalado esta Corporación, debe diferenciarse “la certeza del daño y la magnitud del mismo ya que la legitimación para accionar surge de la primera, siendo posible que en el curso del proceso establezca la segunda”²; en consecuencia, se debe tener que el término de caducidad empezó a correr a partir de la solicitud elevada por el accionante ante la Defensoría del Pueblo para que continuara su condena en el centro carcelario porque consideraba que su vida correría peligro en caso de ser trasladado a otro centro.

Conforme con lo expuesto, para la Sala, la autoridad tutelada no incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial alguno; pues, como se evidenció en el contenido de la providencia censurada, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, efectuó un análisis de las normas y jurisprudencia aplicable al caso bajo estudio, precisando que el señor William Alberto Molina Sánchez, para la fecha del 9 de marzo de 2000, tuvo conocimiento del hecho dañoso y, por tanto, debió promover la acción de reparación directa dentro de los dos años siguientes, por lo que al presentarse la demanda tan solo hasta el 4 de diciembre de 2002, había operado el fenómeno de la caducidad.

Bajo estas consideraciones, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada en ejercicio de los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica dio un alcance probatorio coherente y válido a los documentos allegados al proceso ordinario e interpretó de forma razonable la normativa y los criterios jurisprudenciales aplicables al caso concreto que, a pesar de no resultar satisfactoria en su integridad a la

² Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 11 de agosto de 2011, M.P.: Hernán Andrade Rincón.

parte demandante, hoy tutelante, no se puede colegir que su actuación fue contraria a Derecho.

Por otra parte, se debe señalar que los argumentos alegados por el apoderado de la parte demandante en el escrito de tutela, demuestran su inconformidad con la actuación y decisión adoptada por la autoridad judicial demandada, sin acreditar irregularidades de orden constitucional en las que presuntamente incurrió; por tal razón, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite del proceso de reparación directa, con el único propósito de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.

Así las cosas, se concluye que la sentencia de 6 de diciembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, no vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido, un análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal que constituya una vía de hecho por defectos sustantivo, ni desconocimiento del precedente judicial, que amerite la intervención del juez de tutela. (...)” (Negrilla y subraya fuera del texto original)

De conformidad con lo dispuesto por el máximo órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, se tiene que en los casos de hacimiento, como el sub judice, la caducidad se debe contabilizar a partir de que se tenga la certeza del conocimiento del daño, y en ese entendido, se tiene que de acuerdo a las pruebas aportadas al cartulario por la parte actora, se evidencia, que el señor CESAR ANDRÉS ESCOBAR SEPÚLVEDA conoció las condiciones de hacinamiento en las que se encontraba recluido a partir de su detención, lo cual acaeció el 19 de marzo de 2021.

En tal sentido, encuentra la Sala que el señor CESAR ANDRÉS ESCOBAR SEPÚLVEDA, conoció la causación del daño, esto es las condiciones de hacinamiento a las que estaba sometido mientras estaba privado de su libertad, el día **19 de marzo de 2021**, es decir, que los accionantes contaban hasta el 20 de marzo de 2023 para interponer la demanda o en su defecto para radicar la solicitud de conciliación e interrumpir el fenómeno de caducidad.

Sin embargo, los demandantes elevaron la solicitud de conciliación extrajudicial hasta el **18 de diciembre de 2023**, por lo que se estima que no fue interrumpido el término de caducidad en tiempo, de tal forma que, para el día **11 de marzo de 2024**, cuando fue presentada la demanda, se encontraba ampliamente vencido el término para la

interposición del medio de control de reparación directa, operando el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción.

Por lo anterior, la Sala advierte que la providencia proferida el 27 de junio de 2024 por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué, por medio de la cual, se rechazó la demanda por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad, debe ser **CONFIRMADA**, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la providencia proferida el 27 de junio de 2024, por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué, por medio de la cual, se rechazó la demanda por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

La presente providencia fue discutida y aprobada en la Sala de Decisión de la fecha³.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BELISARIO BELTRÁN BASTIDAS
Magistrado

LUIS EDUARDO COLLAZOS OLAYA
Magistrado
(Salva voto)

CARLOS ARTURO MENDIETA RODRÍGUEZ
Magistrado

³ Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en <https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx>

2ª instancia
Medio de control: Reparación Directa
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
Demandado: Municipio de Ibagué y otros.
Radicación: 73001-33-33-009-2024-00117-01
Asunto: Auto resuelve recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda por caducidad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA

Ibagué, veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Medio de control: Reparación Directa
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
Demandado: Municipio de Ibagué y otros
Radicación: 73001-33-33-009-2024-00117-01
Asunto: Auto resuelve recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda por caducidad del medio de control.

La Sala de Decisión procede a pronunciarse respecto de la apelación presentada por la parte demandante contra el auto proferido el 07 de junio del 2024, por medio del cual el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué decidió rechazar la demanda por considerar que operó la caducidad del medio de control.

Antecedentes (*Documento003ED_001Demanda.Pdf, expediente Samai*)
El extremo activo del presente litigio por conducto de apoderado judicial en ejercicio del medio de control de Reparación Directa previsto en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011 promovió demanda contra el Municipio de Ibagué, el Departamento del Tolima, - Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) - Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Ministerio de Justicia y del Derecho - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional - Fiscalía General De La Nación, para obtener un pronunciamiento favorable sobre las pretensiones referentes a perjuicios morales y materiales.

Refiere que el señor Marlon Daniel Rubio Avendaño, fue capturado el 05 de octubre de 2021 por el delito de hurto calificado y agravado, conforme a la orden emitida por el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de control de garantías de Ibagué, bajo la boleta de detención No. 881. Tras su captura, fue trasladado a la Permanente Central de la Policía de Ibagué, donde permaneció recluso hasta el 01 de septiembre de 2022, es decir, casi 11 meses, y luego trasladado al Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué - Picaleña (COIBA).

Indicó que durante su detención en la Permanente Central, las instalaciones no cumplían con los estándares necesarios para garantizar un trato adecuado a las personas privadas de la libertad (PPL). Pese a lo anterior, el centro contaba con 10

2ª instancia
Medio de control: Reparación Directa
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
Demandado: Municipio de Ibagué y otros.
Radicación: 73001-33-33-009-2024-00117-01
Asunto: Auto resuelve recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda por caducidad.

salas con capacidad para 66 detenidos, estas carecían de áreas de recreación, alimentación, y resocialización. Sumado a lo anterior, desde 2020, la sobrepoblación carcelaria superaba significativamente la capacidad del lugar, alcanzando en 2022 un hacinamiento del 561%. Esta situación generó condiciones inhumanas que vulneraron los derechos fundamentales del hoy demandante, como el derecho a la salud, la dignidad y la integridad personal.

Mencionó que el hacinamiento en las instalaciones de la Permanente Central de Ibagué afectaba tanto a los imputados como a condenados, quienes estaban mezclados sin distinción. Igualmente, la falta de recursos económicos y de personal capacitado impedía que la Policía Nacional proporcionara adecuadamente servicios médicos, programas de resocialización y otros derechos básicos. La situación había sido denunciada a diversas autoridades, pero aun así no se adoptaron las medidas suficientes para solucionar este grave problema, generando un deterioro continuo en la calidad de vida de las PPL y violando sus derechos fundamentales.

Finalmente, la procuraduría 105 Judicial I para Asuntos Administrativos de Ibagué adelantó el trámite de conciliación, que se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio por parte de los convocados, a lo que se dio por surtido el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 13 de ley 1285 del 2009.

Actuación procesal de 1ra instancia

El conocimiento del medio de control fue asignado por la Oficina Judicial de Reparto al Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué. (*Documento004ED_002ActaReparto.Pdf, expediente Samai*)

Providencia apelada (*Documento 07.AutoRechazade_LDR.pdf, expediente digital Samai*). Por auto del 07 de junio del 2024 el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, rechazó la demanda por caducidad del medio de control instaurada por Marlon Daniel Rubio Avendaño; puesto que, consideró que la parte demandante en ejercicio de este medio de control pretende la reparación de los presuntos daños causados con ocasión a soportar el hacinamiento que tenía el Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué - Picaleña (COIBA) que para ese entonces era de un 514%, registrando su fecha de ingreso el 05 octubre del 2021, entendiéndose que desde ese momento debía ser consciente de dicha situación.

Con base a lo anterior indicó que, el plazo de la caducidad para interponer la demanda de reparación directa, es de dos años, luego entonces desde el ingresó a la Permanente Central se inició a contabilizar el referido término hasta el 6 de octubre del 2023 para cumplir con la actuación, sin embargo, cuando radicó la solicitud de la conciliación extrajudicial el 06 de marzo de 2024, ya había operado dicho fenómeno procesal.

En virtud de lo expuesto, la autoridad judicial referenciada dispuso rechazar la demanda por haber operado la caducidad del medio de control.

Recurso de apelación (*Documento 007_Memorial Web Recurso-ApelacionAutoRecha.pdf, expediente Digital Samai*).

2ª instancia
Medio de control: Reparación Directa
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
Demandado: Municipio de Ibagué y otros.
Radicación: 73001-33-33-009-2024-00117-01
Asunto: Auto resuelve recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda por caducidad.

Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación argumentando que no estaba de acuerdo con la decisión que se planteó en el auto que rechazó la demanda de reparación directa, puesto que el caso en cuestión presentaba un daño de naturaleza continua o sucesiva. Por lo tanto, no debía considerarse como referencia, el momento de la detención del afectado en la Permanente Central de la Policía de Ibagué, ya que el daño se mantuvo a lo largo de todo el tiempo que el detenido permaneció recluido en el centro de reclusión, causando así unos perjuicios de forma continua. De hecho, desde que se realizó la captura hasta el momento del traslado fuera de la permanente, el afectado sufrió los efectos del hacinamiento carcelario.

Destaca además que, la conducta vulnerante en el caso en cuestión, hacía referencia a la violación de Derechos Fundamentales y Derechos Humanos, según lo interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que hacinamiento en la Permanente Central, se prolongó en el tiempo para el privado de la libertad Marlon Daniel Rubio Avendaño. Esto ocurrió desde el 05 de octubre del 2021 hasta el 01 de septiembre del 2022, cuando fue trasladado al Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué – Picañela (COIBA), quiere decir que, el daño persistió hasta el día en que dejó de sufrir las consecuencias del hacinamiento.

Por esa razón la parte demandante consideraba, que no se podía tomar como referencia para el cálculo del fenómeno de la caducidad del medio de control, la fecha de detención del privado de la libertad, dado que excluía el último día en que estuvo detenido en la Permanente Central, que fue cuando cesaron los perjuicios causados por el hacinamiento, basando su argumento en el numeral 8º del artículo 136 del CCA, donde finalizaron solicitando que se accediera al *petium* que se contenía en el documento para que se le permitiera al actor acceder a la administración de justicia.

Competencia

El artículo 153 de la Ley 1437 de 2011 establece que los tribunales administrativos conocen en segunda instancia de las apelaciones de autos susceptibles de dicho recurso, proferidos en primera instancia por los jueces administrativos.

Según el artículo 125 de la Ley 1437 de 2011, numeral 2, literal g) (modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con el artículo 243, numeral 1 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021), la decisión que resuelva el recurso de apelación del auto que rechace la demanda debe ser adoptada por la Sala de Decisión.

El límite de la competencia del *ad quem* en la resolución del conflicto **lo marca el libelo impugnatorio** como tantas veces se reconoce en la jurisprudencia¹ y lo tiene

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ; Sentencia del 9 de febrero de 2012, Radicación número: 50001-23-31-000-1997-06093-01 (21060), Actor: Reinaldo Idárraga Valencia y Otros, Demandado: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército, Referencia: Acción de Reparación Directa - Apelación Sentencia. Sentencia de Unificación Jurisprudencial.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, Consejero Ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ; Sentencia del 22 de noviembre de 2018, Radicación número: 08001-23-33-000-2014-01649-01 (2275-16), Actor: Jennifer Sarmiento Sossa, Demandado: Ministerio de

2ª instancia
Medio de control: Reparación Directa
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
Demandado: Municipio de Ibagué y otros.
Radicación: 73001-33-33-009-2024-00117-01
Asunto: Auto resuelve recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda por caducidad.

definido el Legislador -artículos 320 y 328 del Código General del Proceso y artículo 306 de la Ley 1437 de 2011-; lo anterior, sin perjuicio de los deberes que se imponen al Juez Especializado de lo Contencioso para aplicar las disposiciones que rigen nuestra jurisdicción.

Problema jurídico

Consiste en determinar si confirma, revoca o modifica el auto del 07 de junio del 2024, por medio del cual el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, rechazó la demanda referenciada por considerar que operó la caducidad del medio de control de reparación directa, para lo cual es preciso indicar que la Sala de Decisión debe determinar conforme a los lineamientos impartidos por la Ley y la Jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, si nos encontramos ante un daño de ejecución instantánea o uno continuo o de tracto sucesivo.

CONSIDERACIONES

Generalidades de la caducidad

En relación con lo anterior, en particular acerca de la caducidad el Consejo de Estado² ha determinado que es un fenómeno jurídico que implica la pérdida del derecho a ejercer una acción judicial cuando el interesado no la presenta dentro de los plazos establecidos por la ley. Este concepto busca garantizar la seguridad jurídica y evitar que las situaciones jurídicas queden indefinidas en el tiempo, estableciendo plazos razonables para que las personas puedan acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa y hacer valer sus derechos.

En este sentido, la caducidad en el caso de la acción de reparación directa está regulada principalmente por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. Ambos artículos establecen que el término para interponer el medio de control de reparación directa es de dos años. Este término comienza a contarse desde el día siguiente a la ocurrencia del hecho que causó el daño, o desde el momento en que el demandante tuvo o debió tener conocimiento del daño si dicho conocimiento se produjo en una fecha posterior. El propósito de esta regla es evitar que se prolongue indefinidamente el momento en que una persona pueda reclamar la reparación de un daño sufrido, lo que podría generar inseguridad jurídica.

De igual manera, se ha reiterado que el conocimiento del daño es un elemento esencial para determinar el inicio del plazo de caducidad en casos de reparación directa. En casos de lesiones personales, por ejemplo, el cómputo de la caducidad puede variar cuando no existe certeza inmediata del daño. Esto significa que el daño puede manifestarse o conocerse en una fecha posterior al hecho causante, y en estos casos, el término de caducidad comenzaría a contarse a partir de ese momento en el

Defensa, Policía Nacional, Dirección de Sanidad de la Policía y Clínica de la Policía Nacional, Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Ley 1437 de 2011, Sentencia O-222-2018.

² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, consejera ponente: MARTHA NUBIA VELASQUEZ RICO; Sentencia del 29 de noviembre de 2018, Radicación número: 54001-23-31-000-2003-01282-02(47308), Actor: Jesús Aparicio Vera y otros, Demandado: Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, hoy Unidad Nacional de Protección, Referencia: Caducidad y sus generalidades en la Ley 1437 del 2011.

2ª instancia
Medio de control: Reparación Directa
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
Demandado: Municipio de Ibagué y otros.
Radicación: 73001-33-33-009-2024-00117-01
Asunto: Auto resuelve recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda por caducidad.

que el demandante tuvo conocimiento del daño o debió tenerlo. En estos supuestos, es una carga del demandante demostrar cuándo tuvo conocimiento del daño y, si es pertinente, la imposibilidad de haberlo conocido en el momento de su ocurrencia.

La caducidad es una figura procesal que no admite suspensión ni renuncia, con excepción de los casos en que se presenta una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, como lo prevén las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001. Esto significa que, una vez vencido el término legal para presentar la demanda, el juez debe declarar la caducidad de oficio si se encuentra probada, sin que las partes puedan modificar o renunciar a este efecto.

En los casos de hechos dañosos de ejecución instantánea, el conocimiento del daño se convierte en un punto crucial, por ello el énfasis en que se debe diferenciar entre el conocimiento del daño y el conocimiento de su magnitud. La caducidad se cuenta desde que se tiene conocimiento del daño, no de la magnitud del mismo.

En consecuencia, el juez debe valorar en cada caso concreto el momento en que el demandante tuvo conocimiento del daño, y el demandante debe demostrar este conocimiento, así como la imposibilidad de haberlo conocido en el momento de la ocurrencia del hecho. En situaciones en las que el daño no es evidente de manera inmediata, el término de caducidad puede comenzar a contarse desde el momento en que el demandante tiene certeza sobre el daño sufrido. Este criterio es relevante en casos donde las consecuencias del daño no se manifiestan de manera inmediata o se agravan con el tiempo.

La caducidad en los casos de reparación directa tiene un propósito claro: evitar que las reclamaciones se dilaten indefinidamente y garantizar que las personas actúen con diligencia en la protección de sus derechos. La jurisprudencia ha sido enfática en que el término de caducidad no puede quedar sometido a exámenes médicos posteriores o trámites adicionales, como los dictámenes de invalidez, para empezar a correr. Si el daño es evidente desde el momento del hecho, el término de caducidad debe contarse desde el día siguiente a la ocurrencia del hecho.

En resumen, la caducidad en el medio de control de reparación directa se rige por el principio de seguridad jurídica y está orientada a establecer un plazo perentorio para el ejercicio de la acción judicial. Aunque el plazo general es de dos años desde la ocurrencia del hecho, este puede ajustarse cuando el conocimiento del daño se produce en una fecha posterior. La distinción entre el daño y su magnitud, así como el criterio del conocimiento del daño por parte del demandante, son factores determinantes en la aplicación de este término. La figura de la caducidad busca un equilibrio entre el derecho de acceso a la justicia y la necesidad de mantener un orden jurídico claro y previsible.

Generalidades de la Conciliación extrajudicial según la Ley 2212 del 2022

Se tiene que los artículos 105 y subsiguientes de la referida normatividad regulan la conciliación materia contencioso-administrativa, y detallan las funciones del agente del Ministerio Público en este trámite. Entre los aspectos principales se encuentran la expedición de constancias de agotamiento del requisito previo para demandar, la admisión de solicitudes de conciliación, el desarrollo de la audiencia de conciliación,

2ª instancia
Medio de control: Reparación Directa
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
Demandado: Municipio de Ibagué y otros.
Radicación: 73001-33-33-009-2024-00117-01
Asunto: Auto resuelve recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda por caducidad.

las pruebas aportadas, y la posterior aprobación judicial de los acuerdos conciliatorios.

Uno de los puntos clave es que la conciliación extrajudicial es requisito de procedibilidad en ciertos casos y, por lo tanto, antes de poder presentar una demanda ante la jurisdicción, las partes deben intentar conciliar. El agente del Ministerio Público, en su rol de facilitador, expedirá constancias que acreditan que este trámite fue agotado, bien sea porque se celebró la audiencia sin llegar a un acuerdo, o porque alguna de las partes no compareció, o incluso porque el asunto no era conciliable según la ley.

Cuando una solicitud de conciliación es admitida, el agente del Ministerio Público fija una fecha para la audiencia dentro de los treinta días siguientes y decide si esta será presencial o virtual. Además, cita a todas las partes involucradas e informa sobre las consecuencias jurídicas de la no comparecencia. También puede pedir pruebas que resulten necesarias para sustentar el acuerdo conciliatorio, y si las pruebas no se aportan dentro de los plazos establecidos, se considera que no se alcanzó un acuerdo.

El desarrollo de la audiencia de conciliación se realiza en un ambiente imparcial, en el que las partes exponen sus posiciones y, si es necesario, el agente del Ministerio Público puede proponer fórmulas para solucionar el conflicto. En caso de que no se llegue a un acuerdo o una de las partes rechace injustificadamente la propuesta conciliatoria, el agente del Ministerio Público puede suspender la audiencia e incluso reportar posibles faltas disciplinarias del apoderado que haya rechazado injustificadamente la conciliación.

En cuanto al contenido del acta de conciliación, debe incluir la identificación de las partes, un resumen de los hechos, las pretensiones, y en caso de acuerdo, los términos en los que se cumplirá lo pactado. Si no se logra acuerdo alguno, el trámite se considerará agotado y se expedirá una constancia.

Por otro lado, la inasistencia injustificada a la audiencia puede acarrear sanciones, como la imposición de multas y la presunción de un indicio grave en contra de las pretensiones o excepciones de la parte que no asista.

Una vez aprobado, el acuerdo tiene fuerza ejecutiva y hace tránsito a cosa juzgada. Este conjunto de normas refuerza la importancia de la conciliación como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos en el ámbito contencioso-administrativo, asegurando que las partes tengan la oportunidad de resolver sus disputas de manera amigable antes de acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Daño continuado y/o tracto sucesivo y de ejecución instantánea

En este punto, es dable anotar con respecto a la diferenciación de los tipos de daño que se dan para la implementación del medio de control de Reparación Directa, para ello el Consejo de Estado³ ha establecido entonces dos tipos de daño a partir del

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS; Sentencia del 24 de abril de 2024, Radicación número: 25000-23-36-000-2015-01195-01 (626559) Actor: Universidad Manuela Beltrán y otro, Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación, Referencia: Medio de control de reparación directa en la Ley 1437 del 2011 - Diferenciación entre el daño continuado y/o de ejecución instantánea.

2ª instancia
Medio de control: Reparación Directa
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
Demandado: Municipio de Ibagué y otros.
Radicación: 73001-33-33-009-2024-00117-01
Asunto: Auto resuelve recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda por caducidad.

hecho generador, el primero es denominado “*Daño continuado o de tracto sucesivo*” y el segundo “*Daño instantáneo o inmediato*”, por lo que el conteo del término de caducidad en el medio de control de reparación directa debe hacerse en consideración a si el hecho generador del daño produce efectos perjudiciales inmediatos e inmodificables o por el contrario dichos efectos son inmediatos y prolongados en el tiempo.

Sumado a lo anterior decimos entonces que, el daño Continuado y/o de tracto sucesivo, se refiere o se configura cuando se logra demostrar que su identificación precisa y concreta solo es posible con el transcurso del tiempo, y después de ocurrido el hecho que lo generó. Esto implica que, en el momento en que se produce el acto o hecho causante del daño, no es posible advertirlo en su totalidad, y solo se hace evidente con el paso de los días o incluso años. En estos casos, la naturaleza del daño no se presenta de forma inmediata, sino que su manifestación y sus efectos requieren un lapso temporal, lo que complica su identificación y atribución desde el principio.

Para que se configure el daño continuado, es necesario que este se derive de una pluralidad de actos sucesivos que, en conjunto, generen efectos lesivos de manera constante o repetida en el tiempo. A diferencia del daño de ejecución instantánea, que se produce en un solo momento y cuyos efectos se extienden en el tiempo, el daño continuado implica una sucesión de eventos o acciones que generan nuevas consecuencias perjudiciales con cada repetición. En este tipo de daño, cada acto contribuye a mantener o incrementar el perjuicio, lo que permite establecer la continuidad y la relación causal con el hecho generador.

Por otra parte, el daño de Ejecución Instantánea se refiere al perjuicio que se produce de manera inmediata y en un solo acto o evento que ocurre de forma súbita y es generalmente evidente en el momento en el que sucede y cuenta con unas características claras las cuales son: la Inmediatez por cuanto el daño es observable y se manifiesta al instante tras el hecho que lo causa, la Causalidad Directa dado que existe una relación directa y clara entre la acción que genera el daño y el perjuicio que sufre la víctima.

De acuerdo a lo anterior, se debe destacar que, el término de caducidad del medio de control de reparación directa es de (2) años de acuerdo con el artículo 164 del C. de P.A. y de lo C.A. Por regla general, el momento en que inicia la contabilización de dicho termino es el de la ocurrencia del hecho dañoso, presumiéndose entonces que ahí se tiene conocimiento del daño.

Caso concreto

En el presente caso, la parte demandante, a través de su apoderado judicial, presentó una demanda en ejercicio del medio de control de Reparación Directa, previsto en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, contra Municipio de Ibagué, Departamento del Tolima, Rama Judicial Dirección Ejecutiva De Administración Judicial, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios Uspec, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional , Fiscalía General de la Nación.

2ª instancia
Medio de control: Reparación Directa
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
Demandado: Municipio de Ibagué y otros.
Radicación: 73001-33-33-009-2024-00117-01
Asunto: Auto resuelve recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda por caducidad.

Esta demanda tiene como objetivo obtener una compensación por los perjuicios morales y materiales derivados a las condiciones inhumanas por las cuales paso el demandante, vulnerando así sus derechos fundamentales como el de salud, dignidad e integridad personal a causa del hacinamiento en las instalaciones de la Permanente Central de Ibagué que para aquel entonces era 561%, a la cual ingreso desde el 5 de octubre del 2021 y que aun así el daño se mantuvo todo el tiempo que el detenido estuvo en esa Estación, agregando a lo anterior que desde su captura hasta su traslado fuera de la permanente, Marlon Daniel Rubio Avendaño sufrió los efectos del hacinamiento carcelario.

El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Ibagué rechazó la demanda por haber operado la caducidad del medio de control. El cual consideró que la parte demandante en ejercicio de este medio de control pretende la reparación del daño causado con ocasión a soportar el hacinamiento que tenía el Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué - Picaleña (COIBA) que para ese entonces era de un 514%, registrando su fecha de ingreso el 05 octubre del 2021, entendiéndose que desde ese momento debía ser consciente de dicha situación.

Con base a lo anterior, el plazo de la caducidad para interponer la demanda de reparación directa, es de dos años de acuerdo con el artículo 136 inc. 4 del CCA, luego entonces de esa fecha tenía hasta el 6 de octubre del 2023 para cumplir con la actuación, sin embargo, cuando radicó la solicitud de la conciliación extrajudicial el 06 de marzo de 2024, ya había operado dicho fenómeno procesal.

En virtud de lo expuesto, la autoridad judicial referenciada dispuso rechazar la demanda por haber operado la caducidad del medio de control.

Como se indicó previamente el extremo procesal activo, apeló la decisión prevista al considerar que el daño afirmado ostenta calidad de tracto sucesivo y/o continuado durante la permanencia en el centro de reclusión, por ende, considera que el término de caducidad del medio de control de 2 años según lo establecido en el artículo 164 del C. de P.A. y de lo C.A. inició a contar desde el día en que finalizó la reclusión indicada, es decir, desde el día siguiente al 1 de septiembre del 2022.

Pruebas obrantes

Del plenario se observa las siguientes pruebas relevantes para ser tenidas en cuenta como sustento para la decisión que resuelva esta apelación:

- Respuesta al Derecho de Petición por parte de Jeynner Bautista Lozada, *Capitán y supervisor (A) de servicio de la Estación de Policía Sur de la Unidad Metropolitana de Ibagué* GS-2024-014515- METIB, interpuesto por Jorge Orjuela García *Abogado suplente*, vía correo electrónico (fl 25 al 29, Documento 3ED_001Demanda.Pdf).

En la contestación del derecho de petición, la dependencia de la Estación de Policía Sur de la Unidad Metropolitana de Ibagué, afirma que el señor Marlon Daniel Rubio Avendaño quien se encontraba en custodia en calidad de PPL en las instalaciones de la Permanente Central desde el 05 de octubre del 2021 conforme a lo dispuesto en la medida de aseguramiento del artículo 307 literal a, numeral 1 Detención en establecimiento Carcelario, bajo boleta No. 881. De acuerdo con la orden emanada por el Juzgado Sexto Penal Municipal con

2ª instancia
Medio de control: Reparación Directa
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
Demandado: Municipio de Ibagué y otros.
Radicación: 73001-33-33-009-2024-00117-01
Asunto: Auto resuelve recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda por caducidad.

Función de Garantías de Ibagué, hasta el 1 de septiembre del 2022, cuando fue recibido por el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué.

- Respuesta al Derecho de Petición por parte de Oscar Mauricio Romero Gutiérrez, *Subintendente y relevante de la dependencia Distrito Uno, de la Unidad Metropolitana de Ibagué* GS-2023-003124- METIB, vía correo electrónico (fl 75 al 86, Documento 3ED_001Demanda.Pdf).

En atención a la solicitud que hace referencia a la información acerca de la capacidad total con la que cuenta la Permanente Central de la Policía de Ibagué, se da la respuesta detallada acerca de las salas y la capacidad que tiene cada una de ellas afirmando que para la fecha en la que se encontraba el señor Marlon Daniel Rubio Avendaño, el hacinamiento para los años 2021-2022 era del 561%.

Conforme a las pruebas obrantes y relevantes que fueron aportadas al plenario como documentos anexos al escrito de demanda se tienen que el señor Marlon Daniel Rubio Avendaño, fue procesado por los delitos de hurto calificado y agravado, razones que persuadieron al Juez de Control de Garantías para ordenar medida de aseguramiento intramural, la cual fue materializada en las instalaciones de la Permanente Central Ubicadas dentro de la jurisdicción territorial de la ciudad de Ibagué desde el 5 de octubre del 2021 y cuya permanencia se dio hasta el 1 de septiembre del 2022, fecha en la cual fue trasladado al Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué.

Lo anterior, se evidencia según la información entregada por la dependencia Distrito Uno, de la Unidad Metropolitana de Ibagué, en la cual entre otros se indicó:

El señor MARLON DANIEL RUBIO AVENDAÑO, identificado con cedula de ciudadanía de No 1006122719, quien se encontraba bajo custodia en las Instalaciones de la Permanente Central, conforme a lo dispuesto medida de aseguramiento del artículo 307 literal a, numeral 1, detención en establecimiento carcelario, bajo boleta de Detención No. 881 del 05/10/2021, emanada por el Juzgado 6 Penal Municipal con Función de Garantías de Ibagué Tolima, por el delito Hurto calificado y agravado, el cual fue recibido por el centro carcelario y penitenciario COIBA para el día 01/09/2022.

Así las cosas, la autoridad judicial de instancia indicó que para efectos del conteo del término de caducidad inició a contar desde el 5 de octubre del 2021, fecha en la cual el señor Marlon Daniel Rubio Avendaño tuvo conocimiento de las condiciones del centro de reclusión donde permanecería en obediencia al mandato judicial, no obstante, lo anterior el Honorable Consejo de Estado como se indicó ha hecho énfasis en la diferenciación del tipo de daño que se afirme haber ocurrido, es decir, daño continuado o de ejecución instantánea.

Frente a lo anterior, la tesis del Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué consiste en dar por cierto que nos encontramos ante un daño de ejecución instantánea, no obstante, el apelante insiste en afirmar que nos encontramos ante un daño que se prolongó en el tiempo y perduró hasta la fecha en que el demandante en mención estuvo recluso en la permanente central, es decir, hasta el 1 de septiembre del 2022.

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión procede a evaluar el daño asociado para determinar la forma adecuada de verificar el conteo del término de caducidad establecido en el artículo 164 del C. de P.A. y de lo C.A., para lo cual, resulta necesario tener en cuenta que dentro de las pruebas aportadas con el escrito de

2ª instancia
Medio de control: Reparación Directa
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
Demandado: Municipio de Ibagué y otros.
Radicación: 73001-33-33-009-2024-00117-01
Asunto: Auto resuelve recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda por caducidad.

demanda se registra información que fue emanada por parte de la dependencia Distrito Uno, de la Unidad Metropolitana de Ibagué, la cual informó lo siguiente, respecto del número de personas que permanecieron reclusas durante los años 2020 al 2023:

GS-2023-003124-METIB

PERMANENTE CENTRAL		
AÑO	SINDICADOS	CONDENADOS
2020	77	33
2021	624	182
2022	686	196
2023	385	7

4.- Se sirva indicar si en la Permanente Central de la Policía de Ibagué existe hacinamiento carcelario. De ser afirmativa su respuesta, se sirva informar el porcentaje de hacinamiento existente en cada una de las salas que hacen parte de este recinto, en el periodo comprendido desde agosto de 2.020 hasta la fecha, precisando el porcentaje de hacinamiento mes a mes, es decir:

PERMANENTE CENTRAL	
AÑO	HACINAMIENTO
2020	408%
2021	514%
2022	561%
2023	563 %

Frente a lo anterior, se evidencia que la permanente central según la información oficial padeció dentro del periodo de tiempo comprendido entre el 2020 al 2023, de un hacinamiento constante y creciente, al punto que entre el periodo de tiempo se vivió un incremento del 155%, no obstante, la Sala de Decisión se pronunciará exclusivamente en los datos que se relacionan de forma directa con el asunto en concreto, es decir desde la fecha de ingreso hasta la fecha de salida del señor Marlon Daniel Rubio Avendaño, esto es desde el 5 de octubre del 2021 y cuya permanencia se dio hasta el 1 de septiembre del 2022, lo cual permite indicar hasta el momento, que se observó hacinamiento durante el año 2021 del 514% y del 2022 de un 561%.

Corolario, es imperativo indicar que el hacinamiento carcelario es un problema estructural que se manifiesta cuando la cantidad de personas detenidas en un centro de reclusión supera significativamente su capacidad física y logística. Este fenómeno es común en el sistema carcelario del país, ya que genera una sobrepoblación que excede los recursos disponibles, deteriorando las condiciones de vida de los reclusos. En el caso de la Permanente Central de Ibagué, los datos reflejan una grave situación, con porcentajes de hacinamiento que alcanzan el 514% en 2021, el 561% en 2022 y el 563% en 2023. Estos indicadores evidencian que los reclusos pueden llegar a ver menguado el modo de satisfacción de los derechos que les asisten.

El hacinamiento no solo se trata de un número excesivo de reclusos, sino que sus consecuencias afectan múltiples dimensiones del sistema penitenciario. En estos escenarios, la falta de espacio físico se traduce en la sobreocupación de las celdas, lo que genera una falta de privacidad y de condiciones mínimas de habitabilidad. El acceso a servicios básicos como agua, alimentación adecuada, atención médica y medidas sanitarias se ve limitado, lo que incrementa el riesgo de enfermedades transmisibles y la violencia entre los internos. En el caso de la Permanente Central de Ibagué, la cifra del 561% en 2022 señala que, en ese año, había casi seis veces más personas de las que el centro está en capacidad de albergar, lo que agrava todos los problemas asociados a la reclusión masiva.

2ª instancia
Medio de control: Reparación Directa
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
Demandado: Municipio de Ibagué y otros.
Radicación: 73001-33-33-009-2024-00117-01
Asunto: Auto resuelve recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda por caducidad.

Además de las dificultades cotidianas, el hacinamiento también repercute en la eficiencia de la administración de justicia. Los altos índices de sobrepoblación como los reportados entre 2021 y 2023 en la Permanente Central de Ibagué afectan la capacidad del personal penitenciario para garantizar el orden y el control dentro de los recintos, lo que genera un ambiente propenso a disturbios y motines. La sobrecarga también impacta negativamente en los programas de resocialización y rehabilitación, que resultan insuficientes para atender a toda la población carcelaria, limitando las posibilidades de reinserción social de los internos.

Vemos entonces que las condiciones propias del hacinamiento son evidentemente notables, al punto que como se indicó afectan la cotidianidad de las personas que la padecen, respecto de lo cual se tiene que para efectos del vértice de partida de la caducidad se establece que el Consejo de Estado ha indicado respecto de la caducidad del medio de control en asuntos de hacinamiento carcelario que *“aunque los efectos perduren en el tiempo, el conteo del término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del daño”*⁴.

Así las cosas, frente a la posición del apelante de entender que el hecho dañoso causado en circunstancias de hacinamiento carcelario obedece a un daño de tracto sucesivo y/o continuado, resulta una postura jurídica que se separa de la postura jurisprudencial traída a colación.

Una vez claro lo explicado por el Honorable Consejo de Estado se concluye entonces que el asunto en particular debe entenderse que las circunstancias de hacinamiento que presuntamente padeció el señor Marlon Daniel Rubio Avendaño en la Permanente Central de la ciudad de Ibagué obedecen entonces a un daño de ejecución instantánea independientemente que el mismo genere efectos en el tiempo.

Seguidamente, es preciso establecer entonces la fecha cierta en que el demandante tuvo conocimiento del daño para efectos de realizar el conteo del término de caducidad, para lo cual nos referimos a que como se indicó el hacinamiento carcelario presenta rasgos característicos que afligen la cotidianidad de la persona que lo padece, al punto de afectar la cotidianidad, pues aunado a lo ya descrito

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE; Sentencia del 6 de diciembre de 2022, Radicación número: 05001-23-31-000-2002-04829-01(47148) Actor: William Alberto Molina Sánchez y otros, Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y otro, Referencia: Medio de control de reparación directa Caducidad aplicable en asuntos de hacinamiento carcelario.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ; Sentencia del 27 de julio de 2023, Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02769-00 Actor: William Alberto Molina Sánchez y otros, Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Referencia: Acción de Tutela contra providencia judicial que declaró la existencia de la caducidad del medio de control de Reparación Directa en asuntos de Hacinamiento Carcelario.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS; Sentencia del 5 de octubre de 2023, Radicación número: 11001-03-15-000-2023-02769-01 Actor: William Alberto Molina Sánchez, Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Referencia: Acción de Tutela contra providencia judicial que declaró la existencia de la caducidad del medio de control de Reparación Directa en asuntos de Hacinamiento Carcelario.

2ª instancia
Medio de control: Reparación Directa
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
Demandado: Municipio de Ibagué y otros.
Radicación: 73001-33-33-009-2024-00117-01
Asunto: Auto resuelve recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda por caducidad.

anteriormente, el mismo demandante en su escrito de demanda precisó que tuvo que padecer referido hacinamiento del 561% en los 11 meses y 23 días mientras estuvo recluso en la Permanente Central, permitiendo concluir que desde el primer día en el lugar evidenció el daño.

De lo anterior y para efectos del conteo del término de caducidad se tienen las siguientes fechas relevantes:

- El señor Marlon Daniel Rubio Avendaño ingresó a la Permanente Central de la ciudad de Ibagué el 5 de octubre del 2021, fecha en la cual se tiene conocimiento del daño.
- El 6 de octubre del 2021, inicia el conteo del término de caducidad de 2 años estipulados en el artículo 164 del C. de P.A. y de lo C.A.
- Por ende, el 6 de octubre del 2023, feneció el término de caducidad y/o oportunidad para demandar.
- La conciliación prejudicial ante la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos fue solicitada el 6 de marzo del 2024.
- La demanda fue radicada según acta de reparto el día 22 de mayo del 2024.

Frente a lo anterior, es evidente que la demanda de Reparación Directa que nos ocupa fue presentada de forma extemporánea, es decir, posterior al vencimiento de los 2 años previstos, concluyendo entonces que le asistió razón al Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, al rechazar la demanda por caducidad del medio de control, razón por la cual se confirmará el auto del 7 de junio del 2024.

Costas

De acuerdo con el artículo 188 del C. de P.A. y de lo C.A., en concordancia con el artículo 365 numeral 1 del C.G. del P., habrá lugar a condenar en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. No obstante, el numeral 5 de dicho artículo indica que, si la demanda prospera parcialmente, el juez puede abstenerse de condenar en costas.

Al respecto corresponde indicar que en este trámite la relación jurídico procesal aún no se ha trabado, razones por las cuales la Sala de Decisión se abstendrá de condenar en costas en esta etapa.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Tolima,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia del 07 de junio de 2024 proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante la cual rechazó la demanda por caducidad del medio de control, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Notifíquese la presente providencia personalmente a las partes y a los intervinientes, El Departamento del Tolima, - Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) - Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Ministerio de

2ª instancia
Medio de control: Reparación Directa
Demandante: Marlon Daniel Rubio Avendaño
Demandado: Municipio de Ibagué y otros.
Radicación: 73001-33-33-009-2024-00117-01
Asunto: Auto resuelve recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda por caducidad.

Justicia y del Derecho - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional - Fiscalía General De La Nación, en atención a lo dispuesto concurrentemente por el artículo 3º. de la Ley 2213 de 2022 y de la Ley 2080, el **Artículo 46** (que modifica el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011), el **Artículo 48** (que modifica el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, el **Artículo 51** (que modifica el artículo 201A a la Ley 1437 de 2011), el **Artículo 52** (que modifica el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011).

CUARTO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de origen, previas las respectivas anotaciones en los sistemas de información de la Rama Judicial autorizados para dar publicidad a las respectivas actuaciones judiciales.

NOTIFÍQUESE⁵ Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente por Samai)
JOSÉ ALETH RUÍZ CASTRO
Magistrado

(Firmado electrónicamente por Samai)
JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA
Magistrado

NOTA ACLARATORIA: Actuaciones en Pandemia. En cumplimiento de la Ley 2213 de 2022 y el acuerdo PCSJA22-11972 del 30 de junio de 2022, expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura, y el cúmulo de normativa que regula la conectividad en la Administración de Justicia; esta providencia fue estudiada y aprobada en Sala de decisión mediante la utilización de medios electrónicos.

Se deja constancia de que esta providencia fue firmada en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de la ley 1437 de 2011. Puede Validarse el documento en el siguiente link:
<https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/validador.aspx>

⁴ Se presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación cuando el iniciador acuse recibo. En este caso se dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje de datos y del respectivo acuse de recibo certificado por el servidor de la Secretaría Judicial.

Para los efectos, téngase en cuenta la siguiente decisión de la Corte Suprema de Justicia, FRANCISCO TERNERA BARRIOS, Magistrado Ponente, Sentencia STC4204-2023, Radicación número: 11001-02-03-000-2023-01010-00, (Aprobado en sesión del 3 de mayo de 2023).
En el mismo sentido, Sentencia C-420-2020 de la Corte Constitucional, y de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, CSJ STC7684-2021, reiterada en CSJ STC913-2022, CSJ STC16733-2022, CSJ STC715-2023.

En el Consejo de Estado, i. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Auto interlocutorio del 1º. de junio de 2023, Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS; Radicación: 25000-23-41-003-2020-00465-01, ii. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección "A"; Auto del 21 de febrero de 2023; Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ; Radicado 47001-23-33-000-2022-00095-01 (69.471), iii. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B", Consejero ponente: FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ; Sentencia del 29 de marzo de 2023, Radicación: 11001-03-15-000-2023-01252-00, Demandante: Nohemí Forero Galvis, Demandado: Subsección "A" de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Medio de Control: Acción de Tutela, Asunto: Acción de Tutela contra providencia judicial. Los memoriales enviados a un buzón electrónico diferente a aquel destinado para su recepción y que ha sido debida y previamente informado a las partes, deben tenerse por no presentados. El uso obligatorio y correcto de las tecnologías de la información y las comunicaciones es una carga procesal para las partes y sus apoderados.



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN
MAGISTRADO PONENTE: JAIVER CAMARGO ARTEAGA

MEDELLÍN, VEINTISEIS (26) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)

MEDIO DE CONTROL	REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE	MARIA DEL CARMEN RIAÑO PATIÑO Y OTROS
DEMANDADO	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO -INPEC- MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA
RADICADO	05001-33-33-017-2017-00300-01
INSTANCIA	SEGUNDA
SENTENCIA	No. 4
ASUNTO	CONFIRMA SENTENCIA/MUERTE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD/Régimen de responsabilidad objetivo/Responsabilidad del ente territorial por daños ocurridos en centros de detención a su cargo.

Decide la sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Municipio de Rionegro contra la sentencia proferida el 22 de agosto de 2019 por el Diecisiete Administrativo Oral del Circuito de Medellín, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda¹

MARIA CONSUELO PATIÑO DE RIAÑO (madre), MARIA DEL CARMEN RIAÑO PATIÑO (hermana), JHON FREDDY RIAÑO PATIÑO (hermano), NICOLAS DE JESÚS RIAÑO PATIÑO (hermano) presentaron demanda de **REPARACIÓN DIRECTA** en contra del **MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA** y el **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO -INPEC-**, en orden a que se les declare administrativamente responsables por la muerte del señor **VICTOR**

¹ Folios 1-23 del expediente.

MANUEL RIAÑO PATIÑO, ocurrida el 1 de febrero de 2016 mientras se encontraba recluso en el Centro de Detención Transitoria del Municipio de Rionegro.

Como consecuencia, se les ordene a las demandadas pagar a título de indemnización las siguientes cifras:

- i) 100 SMMLV a cada uno de los demandantes por perjuicios morales.
- ii) 100 SMMLV a cada uno de los demandantes por daños a la vida en relación.
- iii) 100 SMMLV a cada uno de los demandantes por daño a la familia.

Los fundamentos fácticos se sintetizan, así:

El señor **VICTOR MANUEL RIAÑO PATIÑO** fue recluso en el **CENTRO DE RETENCIÓN TRANSITORIO** del Municipio de Rionegro-Antioquia.

Durante el tiempo de su detención, la víctima fue objeto de agresiones físicas y extorsiones, conductas que fueron denunciadas por la señora María del Carmen Riaño ante la Personería Municipal de Rionegro el 25 de enero de 2016, consecuencia de lo cual el Personero delegado para Asuntos Penales, se desplazó al centro de retención en donde constató la veracidad de los hechos denunciados.

Pese a las denuncias y solicitudes de protección de su familia, asesinaron al señor Riaño Patiño el 1 de febrero de 2016 en el Centro de Retención Transitoria de Rionegro Antioquia, hechos que cuando se presentó la demanda eran materia de investigación por parte de la Fiscalía.

2. Contestación de la demanda

2.1. INPEC²

Se opuso a todas las pretensiones de la demanda, y tras pronunciarse frente a los hechos narrados en ella, manifestó que en el plenario se acreditó que el señor Víctor Manuel estaba recluido en un centro de reclusión del orden municipal.

Como consecuencia de lo anterior propuso como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que el INPEC no tiene funciones de custodia y vigilancia en dichas penitenciarias, como lo es el lugar donde ocurrió el deceso, pues este se encontraba a cargo del ente territorial demandando.

Finalmente, propuso como excepción la que denominó "INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN", reiterando que dicho instituto no tiene ninguna obligación de custodia o vigilancia frente a las cárceles municipales.

2.2. Municipio de Rionegro³

Se opuso a todas y cada de las pretensiones de la demanda, y luego de pronunciarse frente a los hechos del petitorio, propuso como excepciones las que llamó "FALTA DE LEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR PASIVA", "AUTONOMÍA DEL INPEC RESPECTO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO", y "AUSENCIA DE FALLA EN EL SERVICIO POR PARTE DEL MUNICIPIO".

Para sustentarlas adujo que, si bien es cierto que la muerte se dio al interior del Centro de Detención Transitorio del Municipio de Rionegro, no hubo una falla en el servicio por parte del ente territorial que haya tenido injerencia en ese resultado.

También alegó que, si bien es cierto el Centro de Detención Transitorio se encuentra ubicado en Rionegro, este es un establecimiento público con

² Folios 111 a 119 del expediente.

³ Folios 128-136 del expediente

patrimonio autónomo y personería jurídica, motivos por los cuales el municipio no ostenta la representación legal de aquel.

Manifestó que, aunque existe un daño antijurídico, es imputable al INPEC, pues vigila y controla los centros carcelarios del país, y debe proteger la vida, salud física y mental de los reclusos.

Finalmente, solicitó el llamamiento en garantía de la empresa SEGURIDAD RONDEROS LTDA⁴, como consecuencia de la relación contractual existente entre esta y el Municipio de Rionegro, petición que fue admitida en providencia del 20 de noviembre de 2017.

2.3 LLAMADA EN GARANTÍA SEGURIDAD RONDEROS LTDA⁵

Se opuso a todas y cada de las pretensiones de la demanda, y luego de pronunciarse frente a los hechos del petitorio, propuso como excepciones las que llamó "FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA", "INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN", "IMPOSIBILIDAD LEGAL Y CONTRACTUAL PARA EJERCER FUNCIONES DE CUSTODIA Y VIGILANCIA EN CENTROS CARCELARIOS TRANSITORIOS" Y "CARENCIA ABSOLUTA DE RESPONSABILIDAD EN LOS HECHOS".

Para sustentar dichos medios exceptivos, alegó que la empresa de vigilancia no está facultada legalmente para ejercer poder subordinante de los internos que están en un centro de detención.

En ese mismo orden de ideas, indicó que el contrato suscrito con el Municipio de Rionegro no estipulaba la vigilancia y custodia de internos y, en consecuencia, no puede atribuírsele a la empresa de seguridad ninguna responsabilidad en los hechos que terminaron con la vida del señor Riaño Patiño.

⁵ Folios 43-46 del cuaderno de llamamiento en garantía del expediente.

3. La sentencia de primera instancia⁶

En sentencia proferida el 22 de agosto de 2019, el Juez Diecisiete Administrativo Oral del Circuito de Medellín accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual indicó que la muerte del señor Víctor Manuel es imputable a la administración y arguyó:

"En ese orden de ideas, solo reste decidir si el daño es posible imputarlo de manera objetiva y, desde luego que este será el elemento jurídico que permitiría afirmar que el homicidio del señor RIAÑO PATIÑO debe ser resarcido pues a no dudarlo la relación especial de sujeción que existía entre el centro de reclusión de Rionegro y el detenido, exigía devolverlo en las condiciones que ingresó. El centro de reclusión tiene su cargo la protección guarda y cuidado de todos los detenidos de suerte que, si dentro de sus instalaciones o bajo su custodia alguno sufre un daño, está obligado a responder, a menos que acredite la existencia de una causa extraña que, como en este caso no ocurrió no se desvanece la obligación de responder".

Una vez establecido lo anterior, pasó a definir en cabeza de que entidad se radicaba la responsabilidad frente al hecho dañoso e indicó:

"De conformidad con el artículo 16 de la Ley 65 de 1993, existen unos centros de reclusión del orden nacional cuya competencia está a cargo del INPEC y el artículo 17 ibídem consagra la posibilidad de que existan cárceles departamentales y municipales a cargo de las entidades territoriales, pero bajo la inspección y vigilancia del INPEC.

Con fundamento en estas disposiciones considera el Despacho que el daño aquí reclamado no es imputable al INPEC, como quiera que ocurrió dentro de un centro de retención transitorio a cargo de una entidad territorial, por consiguiente, la obligación de guarda y seguridad respecto a los detenidos está en cabeza de la entidad territorial y no del INPEC pues, aunque la ley le otorga una función de inspección y vigilancia, ésta se predica es del centro de reclusión para que determine si cumple (sic) con las condiciones, emita directrices y recomendaciones pero, no traslada la seguridad de los detenidos al INPEC".

En virtud de lo expuesto, y como el ente territorial demandado no acreditó que operó una de las aludidas causales eximentes de responsabilidad, lo declaró administrativamente responsable y accedió parcialmente a las pretensiones.

⁶ Folios 631 a 643 del expediente.

4. El recurso de apelación

Parte demandada-Municipio de Rionegro⁷

El apoderado de la demandada impugnó la decisión y señaló que, si bien es cierto que a los entes territoriales les corresponde la creación, fusión, supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia, el INPEC es el encargado de realizar la inspección y vigilancia en las cárceles municipales.

Manifestó también inconformidad con la desvinculación tanto del INPEC como de la llamada en garantía dado que consideró esto un contrasentido, pues es la segunda, la empresa contratada por el ente territorial para prestar la labor de vigilancia en el centro de detención y debería ser la llamada a responder si se declara la falta en la legitimación por pasiva del mencionado instituto.

A su vez indicó que la responsabilidad debe radicarse en cabeza del INPEC dado que este hizo caso omiso a las solicitudes de traslado realizadas por la dirección del Centro de Detención Transitoria de Rionegro, y el personero de ese mismo municipio de los detenidos condenados, entre los cuales se encontraba el confeso asesino de la víctima.

Así pues, no obstante reconocer la existencia del daño antijurídico y su imputación a la administración, consideró que es el INPEC y no el ente territorial quien debe ser declarado administrativamente responsable, entre otras porque la permanencia del confeso homicida en el centro de detención transitoria era irregular.

⁷ Folios 653-659 del expediente.

Finalmente, sostuvo que la llamada en garantía incumplió con su obligación contractual, pues, aunque Riaño Patiño venía siendo víctima de amenazas y agresiones, los funcionarios de la empresa nunca lo conocieron a la Dirección del centro de detención como era su obligación.

Por todo lo expuesto, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y se exonere de responsabilidad al Municipio de Rionegro.

5. Alegaciones en segunda instancia

5.1. Municipio de Rionegro⁸:

Dentro del término legal presentó escrito de alegatos de conclusión en el cual reiteró los argumentos presentados en el escrito de apelación.

5.2 INPEC⁹

Dentro del término legal, presentó escrito de alegatos de conclusión en el cual reiteró los argumentos presentados en el escrito de contestación de la demanda.

5.3 SEGURIDAD RONDEROS LTDA¹⁰

Dentro del término legal, presentó escrito de alegatos de conclusión en los cuales reiteró que, el objeto de la relación contractual que tenía con el Municipio de Rionegro al momento de la ocurrencia de los hechos, era “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA ARMADA PARA EL CENTRO DE RETENCIÓN TRANSITORIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA”, lo que evidencia que la llamada en garantía no fue contrada para la vigilancia y custodia de los internos, pues solo estipulaba prestar el servicio de vigilancia armada en las dependencias e instalaciones.

⁸ Folios 676-677 del expediente.

⁹ Folios 682-685 del expediente.

¹⁰ Folios 678-681 del expediente.

También, indicó que en la declaración rendida por la señora Martha Lucía Estrada, quien para el momento de ocurrencia del suceso era la directora del centro de detención, esta aceptó que se reunió con el Personero para hablar sobre las amenazas de las que estaba siendo víctima el señor Riaño, sin embargo, nunca puso en conocimiento de dicha situación a la empresa de seguridad, ni tampoco tomó acciones al respecto.

6. Concepto del Ministerio Público:

El señor Agente del Ministerio Público adscrito a este despacho dentro de la oportunidad se abstuvo de emitir concepto.

II. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Según lo establecido en el artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo de Antioquia es competente para resolver el recurso de apelación contra las sentencias proferidas por los jueces administrativos en primera instancia.

2.- Ejercicio oportuno de la acción

El medio de control de reparación directa tiene una caducidad de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 136 del CPACA. Se tiene entonces que, la muerte del señor Víctor Manuel Riaño Patiño ocurrió el 1 de febrero de 2016, la solicitud de audiencia de conciliación fue presentada el 19 de agosto de 2016, la cual suspendió el referido término hasta el 9 de noviembre de 2016, y la demanda fue radicada el 5 de junio de 2017, por lo que se establece que la acción fue presentada en términos.

3.- Legitimación en la causa

Los demandantes otorgaron poder y acreditaron el parentesco con el señor Víctor Manuel Riaño Patiño Q.E.P.D, En consecuencia, cuentan con legitimación en la causa por activa para promover el medio de control de reparación directa.

También se encuentra acreditada la legitimación por pasiva del Municipio de Rionegro, INPEC, pues la parte actora les atribuye la responsabilidad por los perjuicios generados. Además, les asiste interés para ejercer su derecho de defensa, pues asumirían las consecuencias patrimoniales de una eventual sentencia condenatoria.

4.- Problema Jurídico

Se debe determinar si es procedente confirmar la sentencia que declaró la responsabilidad del Municipio de Rionegro, en virtud de la muerte del señor Víctor Manuel Riaño Patiño Q.E.P.D mientras estuvo privado de la libertad en el Centro de Detención Transitoria del Municipio de Rionegro Antioquia.

En caso de confirmarse la sentencia condenatoria, se analizará a tasación de perjuicios.

5. Tesis de la sala

La sala confirmará la sentencia de primera instancia, en tanto que la parte demandante probó el daño antijurídico y este es imputable al Municipio de Rionegro.

6.1 De la Responsabilidad del Estado:

La Constitución Política de Colombia establece:

"ARTÍCULO 90. *El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.*

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este".

El Estado deberá indemnizar todos los daños imputables y antijurídicos, un daño causado a una persona o sus bienes de manera injusta, sin que exista un título jurídico válido o sin que ella esté obligada a soportarlo.

La imputación se define como la atribución fáctica y jurídica que se hace al Estado de dicha afectación, lo que lo obliga a repararlo de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente.

6.2 De la responsabilidad del Estado por daños ocasionados a las personas reclusas en centros de reclusión.

El H. Consejo de Estado ha señalado que el régimen de responsabilidad en relación con personas reclusas en centros penitenciarios es objetivo, considerando que están bajo la vigilancia, custodia y protección del Estado y que, por su situación, no pueden defenderse de agresiones.

Por lo antedicho, se ha fundamentado la responsabilidad patrimonial del

Estado por los daños causados a quienes se encuentran reclusos en establecimientos carcelarios o centros de reclusión, aunque no exista una falla del servicio o un incumplimiento de las obligaciones de respeto y protección a cargo de las autoridades penitenciarias. En estos eventos se aplica la teoría del daño especial, pues las afectaciones a la vida o integridad de los reclusos, sin que medie el incumplimiento de una obligación, no pueden considerarse algo tolerable por su situación, esto no es una carga que deban soportar por estar privados de la libertad.

Al Respecto el máximo órgano de cierre de lo contencioso administrativo en sentencia de 14 de diciembre de 2022¹¹ adujo:

"En punto de la responsabilidad patrimonial del Estado en los casos de lesión o muerte de personas que se encuentran reclusas en establecimiento carcelario, la jurisprudencia consolidada de la Sección Tercera del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional han sostenido que el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable, en principio, es de corte objetivo. Ello, teniendo en cuenta que estas personas se encuentran bajo una relación especial de sujeción frente al Estado.

No obstante lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación también ha sostenido, que en los casos en lo que (sic) se acredite que la lesión o muerte del recluso tuvo lugar por acción u omisión de las autoridades denotando una falla en el servicio, el juez aplicará el régimen subjetivo de responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que ante la presencia de la falla del servicio este título de imputación tiene aplicación preferente sobre los títulos objetivos".

Mas adelante, en la misma sentencia enfatiza en que el Estado puede exonerarse de responsabilidad, si logra probar que operó una de las causales para tal fin al poner de presente que:

"En todo caso, la postura reiterada de la Sección Tercera del Consejo De estado ha sostenido que en los casos de lesiones o muerte de reclusos el Estado podrá exonerarse de responsabilidad, siempre y cuando se encuentre acreditada una causal eximente de responsabilidad, v.gr. el hecho exclusivo de la víctima, para lo cual se requiere que haya una actuación u omisión por parte de quien sufrió un daño, que dicha actuación sea determinante en la producción del dolo y que esta sea imprevisible, irresistible y exterior a la actividad de la entidad demandada, con independencia de su calificación dolosa o culposa".

¹¹ Rad 76001233100020090020301 exp (54873) M.P Nicolás Yepes Corrales.

6.3 Responsabilidad frente a las cárceles municipales

Respecto a la administración y responsabilidad de las cárceles municipales la Ley 65 de 1993 establece:

ARTÍCULO 17. CARCELES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES. *Corresponde a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, y organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva.*

Mientras se expide la ley que atribuya a las autoridades judiciales el conocimiento de los hechos punibles sancionables actualmente con pena de arresto por las autoridades de policía, éstas continuarán conociendo de los mismos.

Los castigados por contravenciones serán alojados en pabellones especiales.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ejercerá la inspección y vigilancia de las cárceles de las entidades territoriales.

En los presupuestos municipales y departamentales, se incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, como pagos de empleados, raciones de presos, vigilancia de los mismos, gastos de remisiones y viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y demás servicios.

Los gobernadores y alcaldes respectivamente, se abstendrán de aprobar o sancionar según el caso, los presupuestos departamentales y municipales que no llenen los requisitos señalados en este artículo.

La Nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios de integración de servicios, para el mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión del sistema penitenciario y carcelario.

Al analizar un caso similar al de la referencia, el H. Consejo de Estado en providencia del 24 de abril de 2023¹², respecto a la responsabilidad en hechos sucedidos en centros de reclusión municipales, adujo:

“(…) Por lo anterior, para la Sala considera que los hechos ocurridos el 28 de enero de 2011 en el establecimiento carcelario del municipio de El Carmen de Viboral no resultan atribuibles al INPEC, pues no se advierte el incumplimiento de esta autoridad nacional de sus deberes generales de inspección y vigilancia de las cárceles de las entidades territoriales. Máxime si quedó demostrado

¹² Rad 05001-23-31-000-2011-01703-01 (60165) M.P María Adriana Marín.

que ese establecimiento carcelario se encontraba a cargo de la administración municipal de El Carmen de Viboral -que solo albergaba tres (3) reclusos- y, además, porque no resulta posible para la Sala concluir que el INPEC -y no el establecimiento carcelario municipal- hubiera podido evitar el desenlace de los sucesos que ocasionaron las lesiones al señor Jorge Eliécer Cardona Garcés, pues los deberes generales de inspección y vigilancia asignados al INPEC que se predicen respecto de las instituciones carcelarias departamentales y municipales están referidos a la solicitud de información y verificación de las condiciones en que prestan sus funciones, pero no sustituyen, condicionan o modifican la responsabilidad de los entes territoriales en torno a la administración, vigilancia y custodia de la población reclusa en sus establecimientos.

*Adicionalmente, conviene precisar que con anterioridad a los hechos ocurridos el 28 de enero de 2011, se había solicitado por parte de la Secretaría de Gobierno del municipio de El Carmen de Viboral el traslado para una cárcel con mejores condiciones con el fin de que se atendiera el problema psiquiátrico que presentaba el señor Cardona Garcés. El 15 de diciembre de 2010, el INPEC se negó a trasladar al interno con fundamento en que no contaban con ningún establecimiento carcelario que tuviera «anexo psiquiátrico». **No obstante la Sala advierte, al igual que el a quo, que la negativa de traslado del interno no constituyó la causa eficiente de las lesiones a la integridad física del señor Jorge Eliécer, tal como se pasa a explicar en el siguiente acápite, de manera que no resulta posible imputarle responsabilidad**”.* (destaca la sala)

De la norma y jurisprudencia en cita, es claro entonces que, las obligaciones de inspección y vigilancia respecto de las cárceles departamentales y municipales son de carácter general, como quiera que la normativa es clara en cuanto a los deberes de los entes territoriales en materia de dirección, organización, sostenimiento y vigilancia que se encuentren a su cargo.

También se colige que la negativa del traslado del recluso por parte del INPEC, *persé* no es motivo suficiente para endilgar responsabilidad al instituto, sino que debe probar que esta fue causa eficiente de la producción del daño.

En la misma sentencia, en lo referente a la responsabilidad del ente territorial indicó:

“De otra parte, tal como lo afirmó el a quo, el Municipio de El Carmen de Viboral desconoció su deber de custodia y vigilancia como autoridad encargada de la función pública de vigilancia de reclusos que tenía a su cargo, pues por su omisión en tener implementadas medidas de seguridad al interior del

establecimiento carcelario que garantizaran la adecuada y correcta protección de la comunidad carcelaria y de los demás sujetos presentes en el centro de reclusión, en relación con el uso de elementos de alta peligrosidad como lo son el cortopunzante -cuchillo con el cual los reclusos preparaban sus propios alimentos, da lugar a que la Sala concluya sin dubitación alguna que se configuró la falla en el servicio por parte del municipio de El Carmen de Viboral y que esta contribuyó en la causación de las lesiones causadas al señor Jorge Eliécer Cardona Garcés.

Con la anterior cita, queda determinado entonces que, el deber de custodia y vigilancia de los reclusos que se encuentren en un centro de detención municipal está en cabeza del ente territorial, pues es este el encargado de implementar las medidas de seguridad al interior de aquellos.

7. Caso concreto.

El señor Víctor Manuel Riaño Patiño fue recluido en el Centro de Retención Transitorio del Municipio de Rionegro Antioquia, y durante el tiempo que estuvo allí, fue víctima de agresiones físicas y extorsiones, las cuales fueron puestas en conocimiento del Personero delegado para asuntos penales por parte de la hoy demandante María del Carmen Riaño, y este a su vez, se las remitió a la en ese entonces directora del centro de detención el 25 de enero de 2016.

El señor Riaño Patiño fue asesinado el 1 de febrero de 2016 por otro interno del centro de reclusión, en circunstancias que a la fecha de presentación de la demanda aun eran materia de investigación por parte de la Fiscalía.

7.1 De lo probado en el proceso

7.1.1 El señor Víctor Manuel Riaño Patiño fue capturado el 27 de diciembre de 2015 y fue remitido al Centro de Detención Transitoria del Municipio de Rionegro Antioquia.

7.1.2. Estando detenido allí, el hoy occiso fue víctima de extorsiones y amenazas, situación que fue puesta en conocimiento de la Personería

Municipal de Rionegro por parte de su familia, entidad que, a su vez, y después de haber visitado el centro de detención y haberse entrevistado con la directora de este y el señor Riaño en días anteriores a su fallecimiento, el 1 de febrero de 2016 le remitió escrito a la dirección del centro de detención¹³, en el que se lee:

"El día 25 de enero de 2016 acude la señora MARIA DEL CARMEN RIAÑO PATIÑO manifestando agresiones físicas y extorsiones al interno VICTOR MANUEL RIAÑO PATIÑO quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 71.314.851, esta personería se desplazó para el centro de Retención Transitorio de Rionegro para verificar los hechos y se pudo verificar que lo manifestado era cierto pero se le dio trámite diferente pues la vida del interno está en manos de grupos al margen de la ley "URABEÑOS", es bien sabido que estas personas ya fueron condenadas pero nunca han sido trasladados a otras Cárceles".

7.1.3. El 14 de noviembre de 2018, se llevó a cabo audiencia de pruebas, en la que se escuchó entre otros el testimonio de la señora Martha Lucía Estrada Quintero directora del centro de reclusión al momento de ocurrencia de los hechos, quien declaró:

"PREGUNTADO: ¿En el proceso se dice que el (Víctor Manuel) tenía amenazas, que sabe usted de eso? CONTESTÓ: (...) Yo me entero de las dificultades del joven precisamente por una llamada que me hizo el doctor Juan David, el Personero Delegado Para Asuntos Penales, donde me solicita una entrevista, precisamente días antes de lo sucedido y yo le dije ah si doctor no tengo ningún inconveniente, yo le doy la entrevista, dígame a que horas, y el pasó en horas de la tarde, cuando yo mando a llamar al joven Riaño para la entrevista no quería salir del pabellón, le mandé a decir que necesitaba el Personero hablar con el asuntos relacionados con el proceso que se estaba manejando de el porque eso fue lo que me dijo el personero para que el saliera por lo que la hermana como que le había manifestado al personero que él tenía dificultades, y yo le dije al Personero hasta ahora me entero de que el tiene dificultades, precisamente aceptó y salió, cuando sale observamos el Personero y yo que el tenía uno de los pómulos con un morado pero ya desvanecido y le pregunté Torres perdón Riaño ¿qué te pasó? ¿tienes dificultades en el pabellón? Y me dijo no directora no tengo nada, y yo, dime la verdad, ¿tienes dificultades? Porque estás aquí, en este momento y te puedo cambiar de pabellón o te puedes quedar en la celda de llegada y me dijo no, no tengo ningún inconveniente (...) PREGUNTADO: ¿no genera cierta suspicacia en usted que tiene vasta experiencia en este tema que el Personero vaya y visite un interno y que este interno manifieste ante usted que no pasa nada pero que igual se entrevistó con el Personero? CONTESTÓ: Si, uno lógicamente le queda a uno la inquietud, pues, porque manifestar estar tranquilo si tiene dificultades, pero tú sabes que al interno tampoco se

¹³ Folio 47 del expediente

puede presionar para que nos diga lo que no quiere decir, y la mejor herramienta pues era el Personero para que el tuviese más confianza con él, y más que el sí tenía conocimiento de la queja de la hermana, conocía los por menores de la inquietud de la hermana. **PREGUNTADO: ¿Qué acciones tomó la dirección después de esa entrevista frente a la situación del interno? CONTESTÓ:** Después de eso pues, volví a hablar con él y le pregunté por la ventanita y al conteo y **entré inclusive a decirle a los internos que por favor no se dieran a los golpes** que recordaran que un golpe, yo siempre les hacía mucho ese, yo diario entraba a los patios, me gustaba ver, entraba a las celdas, de hecho hacía más incautaciones yo que lo que tenía que hacer la empresa, porque uno ya como se dice zorro en el asunto, sabe dónde están las cosas, quien es el que está, no necesita sino mirarlo y saber que algo está ocultando, entonces **entré para decirles que no estaba contenta con las situaciones que pasaban y que no quería que hubieran disturbios al interior y menos que se trataran de esas maneras, que recordaran que un golpe mal dado podía llevarlos a consecuencias mayores**, y ellos siempre fueron muy respetuosos todos los internos cuando uno ingresaba y dialogaba y les hablaba porque hay que ponerles a ellos de presente que situaciones acarrea una cosa como estas, pues antes de suceder lógicamente para que ellos sepan que un delito al interior del establecimiento puede ser más grave que lo que se ocurra por fuera. **PREGUNTADO: ¿Considera usted que dialogar era suficiente? CONTESTÓ (...)** Digamos posterior a la entrevista del Personero es seguir **insistiendo y con las unidades de guardia que estén muy pendientes del detenido a partir de ese momento de esa entrevista, los movimientos, en la mañana en el conteo, pendiente en la tarde a ver que hay, pero no hay novedades, no pasa nada con el interno** ni antes tengo conocimiento que haya sucedido, imagínate ni siquiera tengo le informe de esa golpiza por ejemplo, y posterior a eso, después de que se coordina con las unidades estar pendientes del detenido total porque no hay causal para un traslado en este momento cuando no tenemos una evidencia clara y precisa si hay una riña o realmente estoy peleando con un elemento que es mío y tú me lo quieres quitar por ejemplo porque eso es de diario, ese es el pan nuestro de cada día en las cárceles, peleas por cualquier cosa, entonces que se hace, con las unidades vamos a estar pendientes de este joven todos los días como está Riaño como está Riaño, novedades hoy todo bien todo bien directora, ¿anoche que pasó? No pasó nada y desafortunadamente ese domingo no trabajé, no fui al centro (...)."

7.1.4. El 1 de febrero de febrero de 2016 fallece el señor Víctor Manuel Riaño Patiño fallece lo cual se encuentra probado con registro civil de defunción¹⁴.

7.1.5. El deceso de produjo al interior del Centro de Detención Transitoria del Municipio de Rionegro Antioquia, lo cual está acreditado con copiosa

¹⁴ Folio 45 del expediente.

prueba que obra en el expediente, entre la que se encuentra el informe de novedad realizado por la directora de este¹⁵.

7.1.6. El informe pericial de necropsia¹⁶ concluyó que la muerte del señor Víctor ocurrió de manera violenta consecuencia de lesiones por trauma contundente.

7.2 Análisis de los elementos de responsabilidad del Estado.

7.2.1 El Daño antijurídico

En el presente caso, el daño alegado es la muerte del señor **VICTOR MANUEL RIAÑO PATIÑO** el 1 de febrero de 2016 mientras se encontraba recluido en el Centro de Detención Transitoria del Municipio de Rionegro-Antioquia, debidamente acreditada con el registro civil de defunción.

7.2.2. El título de imputación

Una vez establecida la existencia del daño, es menester examinar si este le es atribuible al Municipio de Rionegro tanto fáctica como jurídicamente.

Por las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que murió Víctor Manuel, se encuentra probado, ocurrió mientras este estaba recluido en el Centro de Retención Transitoria del Municipio de Rionegro por múltiples lesiones.

7.2.2.1 De la responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario -INPEC- Municipio de Rionegro-Seguridad Ronderos LTDA

¹⁵ Folio 203 del expediente.

¹⁶ Folios 68 y ss del expediente

En el escrito de apelación, el Municipio de Rionegro reiteró que es el INPEC el encargado de la inspección y vigilancia de los centros carcelarios del orden municipal y departamental.

También, puso de presente que dicho instituto hizo caso omiso de las solicitudes de traslado del confeso asesino del señor Riaño Patiño, dado que el mismo ya ostentaba la calidad de condenado.

Cerró su exposición manifestando que, en el caso de que se exima de responsabilidad al INPEC, la llamada a asumir la responsabilidad de lo ocurrido es la empresa Ronderos LTDA dado que fue contratada para prestar el servicio de seguridad privada en el centro de retención municipal.

Sea lo primero indicar que, tal como lo indica la norma y aclara la jurisprudencia citada en las consideraciones de la presente providencia, las obligaciones de inspección y vigilancia que tiene el INPEC respecto de los centros de retención municipales son de orden general, pues es responsabilidad del ente territorial la dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de los centros carcelarios asignados a su cargo.

En el *sub examine*, no hay duda de que el señor Riaño Patiño fue asesinado, después de semanas de sufrir maltratos que fueron puestos en conocimiento de las autoridades municipales por la señora María del Carmen Riaño Patiño, situación que fue puesta en conocimiento de la Directora del Centro de Retención transitoria, sin que se tomara ninguna medida más allá de una conversación con los internos y con el personal de la empresa de la seguridad, por lo que lo sucedido no puede imputársele al INPEC, pues no estaba en sus manos evitar la producción del trágico resultado.

Lo anterior dado que, los deberes generales que tiene el INPEC respecto a este tipo de centros de retención se circunscriben a la solicitud de

información, y verificación de las condiciones en que prestan sus funciones, pero no sustituyen, condicionan o modifican la responsabilidad de los entes territoriales, por lo que no se puede endilgar la muerte del señor Riaño Patiño a un incumplimiento del deber general de vigilancia del INPEC

Ahora bien, para endilgar responsabilidad al INPEC por su negativa frente a la solicitud de traslado de los reclusos condenados, se debe precisar que dicho argumento no es de recibo de la Sala, pues no está probado que esta haya sido la causa eficiente de la muerte del señor Riaño Patiño.

En lo atinente a la empresa Ronderos LTDA se debe precisar que la relación contractual entre esta y el Municipio de Rionegro nació con el contrato de prestación de servicios 085 del 2 de marzo de 2015 el cual tenía por objeto la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA ARMADA PARA EL CENTRO DE RETENCIÓN TRANSITORIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA".

Si bien es cierto, existe la relación contractual, no lo es menos que, esta no exime de responsabilidad al ente territorial, pues es frente a el que se encontraba en relación de especial sujeción el hoy occiso, y por ende, quien tenía el deber y cuidado del que deriva la responsabilidad objetiva es el Municipio de Rionegro y no la empresa Ronderos LTDA.

Como corolario, se debe recordar que, la responsabilidad patrimonial del estado en casos como el de la referencia es de orden constitucional¹⁷, y no puede pretender endosarse dicha obligación mediante un vínculo contractual.

¹⁷ **ARTICULO 90.** El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

Lo anterior no excluye que, si el Municipio de Rionegro estima que hubo un incumplimiento del contrato por parte de la empresa de seguridad privada inicie las acciones que el ordenamiento jurídico tiene previstas para tales situaciones.

Así pues, considera la sala que contrario a lo argumentado por el ente territorial que la responsabilidad del daño está en cabeza de este, pues era quien pudo haber evitado la producción del resultado.

7.2.3 Tasación de perjuicios

Se debe traer a colación lo establecido por el H. Consejo de Estado que en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014¹⁸ adujo:

"En consecuencia, para la reparación del perjuicio moral en caso de muerte se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia calidad de perjudicados o víctimas indirectas, los cuales se distribuyen así:

Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.

Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.

(...)

GRAFICO No. 1					
REPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE					
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
Regla general en el caso de muerte	Relaciones afectivas conyugales y paterno-filiales	Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos)	Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil	Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil	Relaciones afectivas no familiares - terceros damnificados
Porcentaje	100%	50%	35%	25%	15%
Equivalencia en salarios mínimos	100	50	35	25	15

Así las cosas, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4,

¹⁸ Rad. 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172) M.P Olga Melida Valle de la Hoz

además, se requerirá la prueba de la relación afectiva, y finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva.

En casos excepcionales, como los de graves violaciones a los derechos humanos, entre otros, podrá otorgarse una indemnización mayor de la señalada en todos los eventos anteriores, cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral, sin que en tales casos el monto total de la indemnización pueda superar el triple de los montos indemnizatorios antes señalados. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño". (destaca la sala)

En el *sub examine* se tiene probada la relación de parentesco entre la víctima y los demandantes por medio de los registros civiles aportados con el petitorio¹⁹, en este orden de ideas, no cabe duda de que para fijar el quantum indemnizatorio se debe hacer en los niveles 1 y 2 de conformidad con la sentencia de unificación en cita.

Ahora bien, frente a la señora María del Carmen Riaño Patiño, además de su parentesco (hermana), se encuentra prueba suficiente de su grado de cercanía y afecto con el occiso, siempre que era la persona que lo visitaba, aunque esto le implicaba desplazarse de Medellín a Rionegro, era a quien acudía el señor Riaño para enterarla de lo que le ocurría en el centro de detención, lo que permite deducir de manera razonable que frente a ella hubo mayor intensidad y gravedad del daño moral sufrido por la Sala.

7.3. Costas en segunda instancia.

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 estableció que "salvo en los procesos que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil".

El Código de Procedimiento Civil fue derogado por la Ley 1564 de 2012, y era entonces la regulación establecida en la Sección Séptima, Título I

¹⁹ Folios 39-43 del expediente

de este Código, la que debía tenerse en cuenta para la liquidación de las costas.

Con la expedición de la Ley 2080 de 2021, se adicionó el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 en los siguientes términos: “En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando **se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal**” (negrilla fuera de texto).

Aunque la Ley 2080 de 2021 introduce cambios en costas, el Consejo de Estado ha aplicado la tesis subjetiva, analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica; interpretación más acorde a lo contemplado en la reforma citada.

En el presente asunto, no se observa una carencia de fundamentación legal o actuación temeraria que cause la condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN**, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. – CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de agosto de 2019, por el Juzgado Diecisiete Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín, conforme los razonamientos expuestos en el cuerpo de esta providencia.

SEGUNDO. - Sin condena en costas.

TERCERO. –RECONOCER personería a la abogada **ESTEFANIA OSORIO TAPIAS**, identificada con cédula de ciudadanía número 1.152.190.190 y portadora de la T.P. No. 259.309 del C. S. de la J, para representar a la parte INPEC, en los términos del poder que obra en el expediente y teniendo en cuenta que según certificación del Consejo

Superior de la Judicatura –Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, la referida abogada no cuenta con sanciones disciplinarias a la fecha, y su tarjeta profesional se encuentra vigente.

CUARTO. - RECONOCER personería a las abogadas **DANIELA OROZCO ARCILA**, identificada con cédula de ciudadanía número 1.038.407.994 y portadora de la T.P. No. 281.480 del C. S. de la J, y **DIANA CAROLINA ARIAS ARISTIZABAL** con cédula de ciudadanía número 1.036.936.424 y portadora de la T.P 245.632 para representar a la parte demandada Municipio de Rionegro, en los términos del poder que obra en el expediente y teniendo en cuenta que según certificación del Consejo Superior de la Judicatura –Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, las referidas abogadas no cuentan con sanciones disciplinarias a la fecha, y su tarjeta profesional se encuentra vigente.

QUINTO. - ORDENAR la devolución del expediente al Juzgado de origen, para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia se estudió y aprobó en Sala de la fecha como consta en el **ACTA N°011**.

LOS MAGISTRADOS,

(Firmado electrónicamente)
JAIVER CAMARGO ARTEAGA

(Firmado electrónicamente)
ALVARO CRUZ RIAÑO

(Firmado electrónicamente)
VERONICA GUTÉRREZ TOBÓN

Bogotá D.C., febrero del 2025

Señores

JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Ventanilla SAMAI

E.S.D

REFERENCIA: PODER

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

RADICADO: 76001-33-33-009-2024-00278-00

DEMANDANTE: ALEXANDER ARANA FLOR

DEMANDADO: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS USPEC Y OTROS

SERGIO ANDRÉS AGÓN MARTÍNEZ, mayor de edad, vecino y residente en la ciudad de Bogotá, portador de la cedula de ciudadanía No. 91.075.597; actuando en representación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, nombrado en el cargo de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica mediante Resolución No. 000194 del 09 de abril de 2024, delegatario de la función de representación judicial de la entidad conforme al numeral 5 del artículo 14 del Decreto 4150 del 2011; respetuosamente manifiesto que otorgo **PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** en cuanto a derecho se requiere, al Doctor **DIEGO FABRIANNY ÑAÑEZ VIVEROS**, como apoderado principal, también mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.061.087.109 de Florencia, Cauca, con tarjeta profesional No. 276.474 del Consejo Superior de la Judicatura, correo electrónico para efectos de notificaciones diego.nanez@uspec.gov.co y buzonjudicial@uspec.gov.co, para que actúe dentro del proceso de la referencia en representación de los intereses que le asisten a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC.

El apoderado queda revestido de las facultades de las cuales trata el artículo 77 del Código General del Proceso, además de las inherentes, concomitantes y subsiguientes a este mandato tendrá la de ley, sin que pueda decirse en ningún momento que actúa sin poder suficiente y expresamente para recibir, desistir, conciliar y transigir de acuerdo a los parámetros emitidos por el comité de conciliación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelario - USPEC, proponer excepciones e interponer los recursos de ley y en general para todo cuanto en derecho conveniente en la defensa de nuestros intereses dentro del proceso de la referencia.

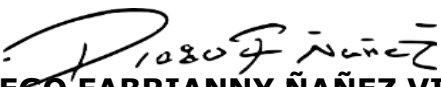
Sírvase reconocerle personería y tenerlo como nuestro apoderado en los términos y facultades de este escrito.

Atentamente,



SERGIO ANDRÉS AGÓN MARTÍNEZ
C.C. No. 91.075.597

Acepto,



DIEGO FABRIANNY ÑÁÑEZ VIVEROS
C.C. No. 1.061.087.109
T.P No. 276.474 del C.S. de J

Reviso: Gustavo Antonio Romero Álvarez – Coordinador Grupo Defensa Judicial





Diego Fabrianny Ñañez Viveros <diego.nanez@uspec.gov.co>

Fwd: NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2024-00278-00

1 mensaje

Graciela Martinez Sanchez <graciela.martinez@uspec.gov.co>

5 de febrero de 2025, 15:06

Para: Diego Fabrianny Ñañez Viveros <diego.nanez@uspec.gov.co>, Sergio Andres Agon Martinez <sergio.agon@uspec.gov.co>, Carlos Andres Cardoza Castillejo <carlos.cardoza@uspec.gov.co>

Cc: Gustavo Antonio Romero Alvarez <gustavo.romero@uspec.gov.co>

Buenas tardes Doctor Diego

Por medio de la presente envío notificación de admisión de la demanda de la reparación directa con radicado 2024-00278 del cual figura como apoderado, se envía poder a firma, para su información y fines pertinentes.

Forwarded Conversation**Subject: Fwd: NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2024-00278-00**De: **Buzon Judicial** <buzonjudicial@uspec.gov.co>

Date: mié, 29 ene 2025 a las 15:21

To: Graciela Martinez Sanchez <graciela.martinez@uspec.gov.co>

**Buzon Judicial**buzonjudicial@uspec.gov.co

Teléfono +57 60(1)6664426

[Av calle 26 No 69-76](#)

Edificio Elemento, pisos 12 y 13 - Torre 4 Agua.

Bogotá, D. C., Colombia

www.uspec.gov.co

----- Forwarded message -----

De: <jadmin09cli@notificacionesrj.gov.co>

Date: mié, 29 ene 2025 a las 15:09

Subject: NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2024-00278-00

To: <buzonjudicial@uspec.gov.co>

NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2024-00278-00

JUZGADO 9 ADMINISTRATIVO DE CALI

CALI (VALLE)-76001, miércoles, 29 de enero de 2025

NOTIFICACIÓN No. 19373

Señor(a):

**LA NACIÓN - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
(USPEC)**

Email: buzonjudicial@uspec.gov.co

ACTOR: ALEXANDER ARANA FLOR

DEMANDANDO: MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE Y OTROS Y OTROS

RADICACIÓN: 76001-33-33-009-2024-00278-00

ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Laboral

Para los fines pertinentes me permito informarle que en la fecha 28/01/2025 se emitió Auto admite demanda en el asunto de la referencia.

Para consultar y visualizar el expediente ingrese al siguiente link de SAMAI: [URL Proceso](#)

Apreciado usuario en cumplimiento del Acuerdo PCSJA23-12068 del 16/05/2023, se informa que el medio dispuesto para la radicación de memoriales, solicitud de acceso virtual a los expedientes, solicitudes de citas, copias, entre otros, es la ventanilla de atención virtual, a la que podrá ingresar a través del siguiente enlace: [URL Ventanilla de Atención Virtual](#)

Cordialmente,

Firmado electrónicamente por: CARLOS JULIAN OROZCO MUÑOZ

Fecha: 29/01/2025 15:09:07

Secretario

Se anexaron (1) documentos, con los siguientes certificados de integridad:

- Documento(1): 6_Autoadmitedem_202400278ADMITEDEMAN_0_20250128164932602.PDF
- Certificado(1): 8159D87982E4B6286DAB617ABF61299E922E777A80C2F3ABBE89886FB2269730

Usted puede validar la integridad y autenticidad de los documentos remitidos, ingresando los certificados referidos al siguiente link: [URL Validador](#)

Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / disminuya el consumo del papel. Se han omitido las tildes y caracteres especiales para efectos de compatibilidad.

SEDE ELECTRÓNICA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
COLOMBIA SAMAI

Ha recibido este correo electrónico porque está intentando realizar una acción en la ventanilla virtual de SAMAI.

Rama Judicial de Colombia | © 2020 - 2025 Copyright: Consejo de Estado

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.



De: **Graciela Martinez Sanchez** <graciela.martinez@uspec.gov.co>
Date: mié, 29 ene 2025 a las 16:33
To: Carmen Edith Capador Martinez <carmen.capador@uspec.gov.co>

Buenos días Doctora Carmen Edith

De manera atenta, me permito remitirle poder de representación para la defensa de los intereses de la USPEC dentro del proceso de reparación directa 2024-00278 a nombre del Doctor Diego Ñañez, teniendo en cuenta que están admitiendo la demanda--

Gracias por su atención

Cordialmente,



Auxiliar Administrativo
Oficina Jurídica
Graciela Martinez Sánchez
graciela.martinez@uspec.gov.co
Teléfono: +57 60(1) 6664426
[Av. Calle 26 No 69 - 76](#)

--

Gracias por su atención

Cordialmente,



Auxiliar Administrativo

Oficina Jurídica

Graciela Martínez Sánchez

graciela.martinez@uspec.gov.co

Teléfono: +57 60(1) 6664426

[Av. Calle 26 No 69 - 76](#)

Edificio Elemento, pisos 12 y 13 - Torre 4 Agua.

Bogotá, D. C., Colombia

www.uspec.gov.co



2 adjuntos



76001333300920240027800_6_Autoadmittedem_202400278ADMITEDEMAN_0_20250128164932602_

TAGrabarDetallereserva133826369385151801.pdf

56K



poder Diego -2024-00278.pdf

145K

RESOLUCIÓN NÚMERO 000194 DEL 9/4/2024 21:20:24

"Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario de libre nombramiento y remoción de la Planta Global de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC"

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS- USPEC**

En uso de las facultades legales y en especial de las que le confiere el numeral 15 del artículo 12 del Decreto 4150 del 3 de noviembre de 2011, el Decreto 1734 del 20 de octubre de 2023 expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho "por la cual se efectúa un nombramiento ordinario" y,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el numeral 15 del artículo 12 del Decreto 4150 de 2011, el Director General de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, ejerce la facultad nominadora.

Que mediante Decreto 242 del 1º de febrero de 2012, se establece la planta de empleos de la unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC.

Que revisada la hoja de vida y verificado el manual de funciones y competencias laborales de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC y con fundamento en la evaluación de hoja de vida y la verificación de requisitos del caso, según consta en el formato TH-FO-003 de la fecha 05 de abril de 2024, suscrita por la Coordinadora del Grupo de Administración de Personal, el señor **SERGIO ANDRÉS AGÓN MARTÍNEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.075.597, cumple con los requisitos para ocupar el empleo de libre nombramiento y remoción de Jefe de Oficina Asesora Jurídica Código 1045 Grado 11 – Oficina Asesora Jurídica de la Planta Global de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC."

Que por lo anterior el día 08 de abril de 2024 el Director Administrativo y Financiero de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, certificó que el señor **SERGIO ANDRÉS AGÓN MARTÍNEZ**, reúne los requisitos exigidos para ejercer el cargo de Libre Nombramiento y Remoción de Jefe de Oficina Asesora Jurídica Código 1045 Grado 11 – Oficina Asesora Jurídica.

Que por la necesidad propia del servicio del área, se requiere realizar el nombramiento y ocupar este empleo que en este momento se encuentra en vacancia definitiva.

Que existe disponibilidad presupuestal en la presente vigencia para cubrir los cargos vacantes, conforme a los certificados de disponibilidad presupuestal No. 4924 y 5224 del 12 de enero de 2024, expedidos por la Coordinación de Presupuesto, de la Subdirección Financiera de la Unidad.

RESOLUCIÓN NÚMERO 000194 DEL 9/4/2024 21:20:24

"Por la cual se efectúa un nombramiento ordinario de libre nombramiento y remoción de la Planta Global de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC"

En mérito de lo expuesto,

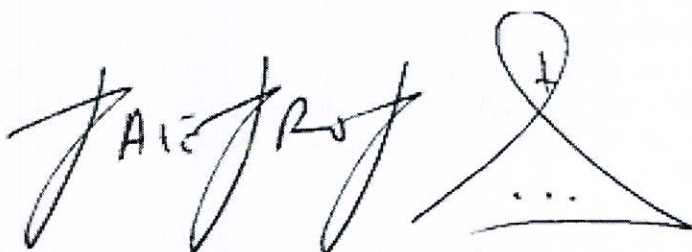
RESUELVE:

ARTICULO 1. Nombrar al señor **SERGIO ANDRÉS AGÓN MARTÍNEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.075.597 en el empleo de libre nombramiento y remoción de Jefe de Oficina Asesora Jurídica Código 1045 Grado 11 - Oficina Asesora Jurídica de la Planta Global de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, con una asignación básica mensual de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$9.881.954.00).

ARTICULO 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 9/4/2024 21:20:24



FIRMA

LUDWING JOEL VALERO SÁENZ

Director General

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-

Elaboró: Jully Viviana Bustos Bohórquez. - Coordinadora Grupo Administración de Personal.



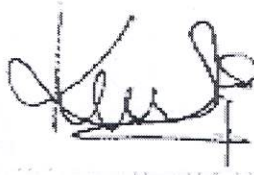



Revisó: Karol Vanessa Ortigoza Vargas.- Subdirectora Administrativa.

Revisó: Juan Carlos Barragán Suárez. - Director Administrativo y Financiero

Control de Legalidad: Paola Andrea Beleño Morales.- Coordinadora Grupo de Acciones de Tutela, Conceptos, Control de Legalidad y Derechos de Petición.

Revisó: Magda Yolima Peña Carreño.- Asesora Dirección General.

Ubicación archivo: \\192.168.70.20\jully bustos\Desktop\GRUPO ADM. PERSONAL 2023\DOCUMENTOS PARA NOMBRAMIENTOS\DIRECTIVOS\SERGIO ANDRES AGON MARTINEZ\Formatos word\22. Resolucion de Nombramiento.docx

PROYECTO	JULLY VIVIANA BUSTOS BOHORQUEZ	4/8/2024	
	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 11 GRADO 11	4:24:37 PM	
REVISOR	JULLY VIVIANA BUSTOS BOHORQUEZ	4/8/2024	
	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 11 GRADO 11	5:57:42 PM	
REVISOR	KAROL VANESSA ORTIGOZA VARGAS	4/8/2024	
	SUBDIRECTOR	7:34:49 PM	
REVISOR	JUAN CARLOS BARRAGAN SUAREZ	4/8/2024	
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	8:56:24 PM	
REVISOR	JULLY VIVIANA BUSTOS BOHORQUEZ	4/9/2024	
	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 11 GRADO 11	9:06:29 AM	
REVISOR	JULLY VIVIANA BUSTOS BOHORQUEZ	4/9/2024	
	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 11 GRADO 11	5:34:10 PM	

REVISOR	PAOLA		
	ANDREA	4/9/20	
	BELENO	24	
	MORALES	5:59:1	BSH
	COORDINADO	2 PM	
	R(A)		

REVISOR	MAGDA		
	YOLIMA PENA	4/9/20	
	CARRENO	24	
	ASESOR	8:50:1	MR.
	APOYO A LA	4 PM	
	GESTIÓN		

FIRMA	LUDWING		
	JOEL VALERO	4/9/20	
	SAENZ	24	
	DIRECTOR(A)	9:19:4	
	GENERAL	9 PM	

[Handwritten signature]



ACTA DE POSESIÓN NÚMERO: 000010

Bogotá D.C., 11 de Abril de 2024

En Bogotá, se presentó en la Dirección General, de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, en virtud de lo dispuesto en la Resolución número **000194** del **09 de Abril de 2024**, al señor **SERGIO ANDRÉS AGÓN MARTÍNEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 91.075.597**, con el fin de tomar posesión del cargo Jefe Oficina Asesora Jurídica código 1045 Grado 11, para el cual fue nombrado en la Oficina Asesora Jurídica, con asignación básica mensual de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$9.881.954.00).

Prestó juramento ordenado por el artículo 122 de la Constitución Política.

Manifestó bajo la gravedad de juramento no estar incurso en alguna causal de inhabilidad general o especial, de incompatibilidad o prohibición alguna establecida en la Ley 4 de 1992 y demás disposiciones vigentes para el desempeño de empleos públicos.

En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 49 del Decreto 1950 de 1973, para esta posesión sólo se exige la presentación de la cédula de ciudadanía.


SERGIO ANDRÉS AGÓN MARTÍNEZ
Posesionado


LUDWING JOEL VALERO SAENZ
Director General

Elaboró: Jully Viviana Bustos Bohórquez - Coordinadora Grupo Administración de Personal
Revisó: Karol Vanessa Ortigoza Vargas - Subdirectora Administrativa